



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

**La motivación sobre proporcionalidad y plazo razonable frente
al debido proceso en los autos de prisión preventiva en San
Ignacio 2022**

Autor:

Bach. Cueva Mendoza Roy Antony

Asesor:

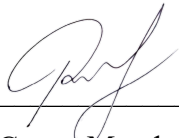
Mag. Vargas Rodríguez César

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 22 de marzo de 2024

LAMBAYEQUE, 2024

Tesis titulada: “La motivación sobre proporcionalidad y plazo razonable frente al debido proceso en los autos de prisión preventiva en San Ignacio”; **presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**, por:



Bach. Cueva Mendoza Roy Antony

Autor



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

Asesor

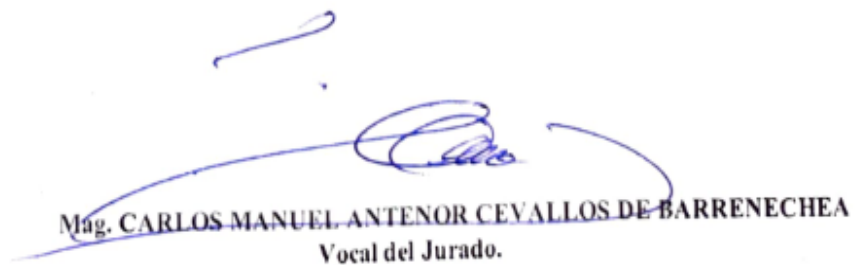
APROBADO POR:



Mag. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

Dedicada a mi abuelo Mario Mendoza Villalobos, por haberme inculcado los valores que guían mi vida y con quien tengo una deuda impagable por todo lo que hizo por mí. A mi hijo Mathías, que se encuentra en camino, y se ha convertido en mi mayor motivación. A mi madre Doris, mi padre Julio y mi hermana Mayra, por su apoyo incondicional. A mi esposa Talía, por impulsarme a cumplir este anhelo profesional.

Agradecimiento

Agradezco a mis padres Doris Mendoza Cubas y Julio César Juárez Torres, por todo el apoyo que me han brindado para alcanzar este anhelo profesional. A mi hermana Mayra, por motivarme siempre a ser cada día mejor. A mis profesores de la Facultad de Derecho, por enseñarme el amor por la profesión. Al fiscal provincial Luis Alberto García Ticliahuanca, por brindarme la confianza de aprender el derecho penal desde la práctica diaria en su despacho fiscal. A los jueces y fiscales de la provincia de San Ignacio, por la información brindada para el desarrollo de esta investigación.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 26-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Roy Antony Cueva Mendoza**.

Siendo las 4:00 p.m. del día viernes 22 de marzo del 2024 se reunieron en la sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA MOTIVACIÓN SOBRE PROPORCIONALIDAD Y PLAZO RAZONABLE FRENTE AL DEBIDO PROCESO EN LOS AUTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA EN SAN IGNACIO 2022**", designados por Resolución N° 168-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 03 de mayo del 2023, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.

SECRETARIO : Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**.

VOCAL : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, nombrada por Resolución N°168-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 03 de mayo del 2023.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 137-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 13 de marzo del 2024.

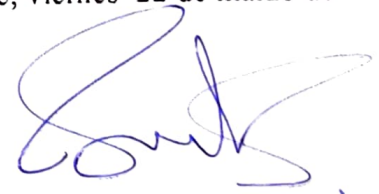
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Roy Antony Cueva Mendoza** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO**.

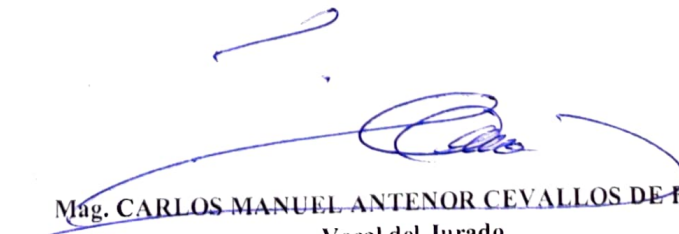
Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 4:50 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 22 de marzo del 2024


Mag. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado


Dr. **FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO**
Secretario del Jurado



Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Roy Antony Cueva Mendoza, Titulada LA MOTIVACIÓN SOBRE PROPORCIONALIDAD Y PLAZO RAZONABLE FRENTE AL DEBIDO PROCESO EN LOS AUTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA EN SAN IGNACIO 2022, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 13% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

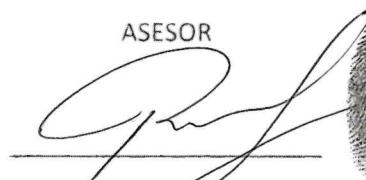
Lambayeque, 02 de febrero del 2024



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

DNI: 16484422

ASESOR



Bach. Roy Antony Cueva Mendoza

DNI: 76508959

Autor

La motivación sobre proporcionalidad y plazo razonable frente al debido proceso en los autos de prisión preventiva en San Ignacio 2022

INFORME DE ORIGINALIDAD

13%	13%	5%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unprg.edu.pe	3%
	Fuente de Internet	
2	hdl.handle.net	2%
	Fuente de Internet	
3	repositorio.ucv.edu.pe	2%
	Fuente de Internet	
4	repositorio.unprg.edu.pe:8080	1%
	Fuente de Internet	
5	doku.pub	<1%
	Fuente de Internet	
6	repositorio.upagu.edu.pe	<1%
	Fuente de Internet	
7	ebin.pub	<1%
	Fuente de Internet	
8	fundacionkoinonia.com.ve	<1%
	Fuente de Internet	


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
DNI: 16484422

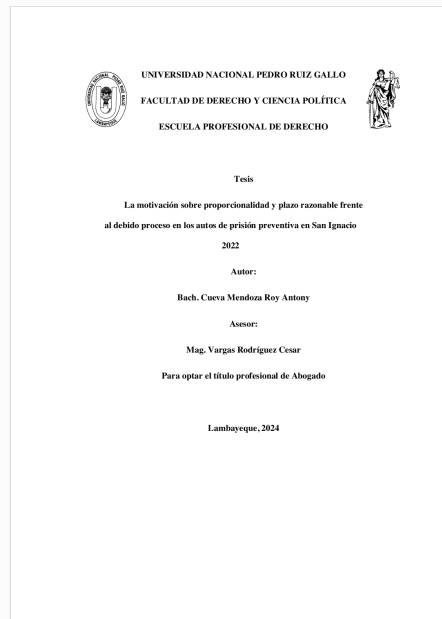


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Roy Antoni Cueva Mendoza
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: La motivación sobre proporcionalidad y plazo razonable fre...
Nombre del archivo: TESIS_CUEVA_MENDOZA.docx
Tamaño del archivo: 114.51K
Total páginas: 105
Total de palabras: 20,271
Total de caracteres: 109,707
Fecha de entrega: 30-ene.-2024 07:22p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2282470772



Derechos de autor 2024 Turnitin. Todos los derechos reservados.


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
DNI: 16484422

Índice general

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice general	v
Índice de tablas.....	ix
Resumen	x
Abstract	xi
Introducción	12
Capítulo I.....	16
Los aspectos metodológicos de la investigación.....	16
1.1. El planteamiento del problema.....	16
1.2. La formulación del problema	17
1.3. La justificación de la investigación	17
1.4. La importancia de la investigación.....	18
1.5. Los objetivos de la investigación	19
1.5.1. El objetivo general	19
1.5.2. Los objetivos específicos	19
1.6. La hipótesis	20
1.7. Las variables.....	20
1.7.1. Variable independiente.....	20

1.7.2. Variable dependiente.....	20
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	21
1.8.1. Método de interpretación exegetica jurídica	22
1.8.2. Método de interpretación jurídica sistemática.....	23
1.8.3. El método lógico jurídico	23
Capítulo II	25
El fundamento para la motivación de las resoluciones judiciales	25
2.1. Los trabajos previos a la tesis.....	25
2.2. La motivación como parte de la argumentación jurídica	27
2.3. Finalidad de las resoluciones judiciales	31
2.4. Las resoluciones judiciales y su motivación	33
Capítulo III	36
La proporcionalidad y el plazo razonable en la prisión preventiva..	36
3.1. La proporcionalidad como principio en el proceso penal	38
3.2. La prisión preventiva como medida cautelar en el proceso penal	40
3.3. La excepcionalidad de la prisión preventiva	43
3.4. Los plazos de la prisión preventiva y su determinación.....	45
Capítulo IV	49
Análisis y resultados.....	49
4.1. Unidad de análisis	49

4.2. Guía de observación de la muestra.....	50
4.3. Resultado del análisis de los autos de prisión preventiva	50
Capítulo V	62
Contrastación de la hipótesis.....	62
5.1. Discusión De Los Resultados.....	63
5.1.1. Discusión del objetivo específico: “Estudiar los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales”	63
5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Describir los parámetros jurídicos para determinar la proporcionalidad y el plazo razonable en la aplicación de la prisión preventiva”	78
5.1.3. Discusión del objetivo específico: “Analizar los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable”	82
5.2. Validación de las variables.....	89
5.2.1. Sobre la variable independiente: “La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable”	89
5.2.2. Sobre la variable dependiente: “Debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022”	93
5.3. Contrastación de la hipótesis.....	95

5.3.1. Determinación final.....	95
Conclusiones	97
Conclusión general	97
Conclusiones específicas.....	97
Recomendaciones.....	99
Bibliografía.....	102

Índice de tablas

Tabla 1: Resultado de la evaluación de los autos de prisión preventiva registrados en el juzgado de investigación preparatoria de San Ignacio en el Distrito Judicial de Lambayeque.....	50
Tabla 2: Cuadro de contrastación entre la hipótesis inicial y la determinación final.....	95

Resumen

La finalidad de esta tesis se enfocó en la determinación del efecto que estaría produciendo la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable como aspectos que deben ser observados por parte de los magistrados del Poder Judicial en el campo penal, específicamente sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva, tal análisis tuvo lugar en el espacio jurisdiccional que ocupa al juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

La atención de lo observado tiene su punto de partida en la verificación del carácter motivador que deberían observar las resoluciones judiciales sobre todo en lo que respecta a la aplicación de los criterios adoptados como guía para el desarrollo de su criterio. El sentido de control que debería operar por parte de los magistrados no se advierte como un elemento de eficacia durante esta etapa del proceso penal, sobre todo en virtud de lo que indica como un tratamiento insuficiente respecto a la motivación que debe existir al momento de evaluar la condición proporcional de la propuesta, como resultado se verifica que se trata únicamente de una traslación de conceptos antes que el desarrollo de cada uno de los subprincipios que precisa la proporcionalidad como examen de la medida cautelar a ser aplicada.

Como resultado se aprecia una falla a nivel de la proporcionalidad de la medida, también tiene un efecto sobre la condición de razonabilidad del plazo en el que se observa el vínculo con el análisis previo sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha, esto demuestra la existencia de un problema jurídico que debe ser atendido.

Palabras clave: Motivación, Proporcionalidad, Plazo razonable, Debido proceso, Prisión preventiva.

Abstract

The purpose of this thesis focused on determining the effect that the insufficient motivation of proportionality and reasonable time would be producing as aspects that must be observed by the judges of the Judicial Branch in the criminal field, specifically on due process in preventive detention orders, such analysis took place in the jurisdictional space occupied by the preparatory investigation court in San Ignacio 2022.

The attention to what was observed has its starting point in the verification of the motivating nature that judicial resolutions should observe, especially with regard to the application of the criteria adopted as a guide for the development of their criteria. The sense of control that should operate on the part of the magistrates is not seen as an element of effectiveness during this stage of the criminal process, especially by virtue of what is indicated as insufficient treatment regarding the motivation that must exist at the time of evaluating the proportional condition of the proposal, as a result it is verified that it is only a translation of concepts before the development of each of the subprinciples that requires proportionality as an examination of the precautionary measure to be applied.

As a result, a failure is seen at the level of proportionality of the measure, it also has an effect on the condition of reasonableness of the period in which the link is observed with the previous analysis on the necessity, suitability and proportionality itself, this demonstrates the existence of a legal problem that must be addressed.

Keywords: Motivation, Proportionality, Reasonable term, Due process, Preventive detention.

Introducción

Como se puede apreciar el título que consigna esta investigación es “La motivación sobre proporcionalidad y plazo razonable frente al debido proceso en los autos de prisión preventiva en San Ignacio 2022”, lo cual surge como interés de investigación en base a lo que el investigador experimentó en la realidad en dicha zona jurisdiccional, por lo mismo que se organizó el planteamiento de la realidad para que se produzca el análisis sobre dicho espacio.

Como se ha dicho la finalidad de estudiar este tema, es determinar si está produciéndose afectación del debido proceso como tal mediante la actividad jurisdiccional que determina la prisión preventiva, específicamente se revisó la motivación como elemento esencial de las resoluciones judiciales, respecto a la evaluación de los presupuestos en el que se incluye la proporcionalidad como factor constitucional del control que deben asegurar los magistrados del Poder Judicial. El interés si duda se viabiliza debido a la exigencia de esta evaluación y de que se perfeccione la condición garantista que debería tener el proceso penal.

Tal cual se ha indicado, la evaluación de estos criterios y su correspondiente motivación dependió de la configuración de una secuencia lógica, lo cual se puede apreciar en el contenido del Capítulo primero en el que se marca dicha secuencia de análisis partiendo por la formulación del

problema que indicó: ¿Qué efectos produce la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022?

Es en base a tal cuestionamiento que se propone una respuesta a priori, lo cual se ha generado de manera previa al desarrollo de la investigación por lo mismo que en su momento no tenía posibilidad de ser comprobada y que señala lo siguiente: La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable generan un efecto de vulneración de los derechos que incorpora el debido proceso, evidenciado en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

El diseño de la contrastación de esta hipótesis ha incluido la configuración de las metas que se plantean en la investigación como guía para su desarrollo, es así que se tiene el objetivo general: Determinar el efecto que produce la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022. De igual manera se han plasmado las metas específicas que son: Estudiar los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales; Describir los parámetros jurídicos para determinar la proporcionalidad y el plazo razonable en la aplicación de la prisión preventiva, Analizar los autos de prisión preventiva

del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable.

Según esta distribución se inició la investigación por lo cual se plasma en el Capítulo segundo el desarrollo del fundamento que justifica la participación de la motivación en las resoluciones judiciales, en el que se consideró apropiada la participación de los trabajos previos, que en tanto antecedentes a la investigación marcan la ruta de análisis. Además, se ha tratado sobre la argumentación jurídica como teoría que incorpora a la motivación de las decisiones, además de la finalidad de las resoluciones judiciales para entender su vínculo con la motivación exigida.

También es importante señalar que en el Capítulo tercero se tiene el desarrollo teórico sobre la proporcionalidad y el plazo razonable, en el cual se especifica sobre la condición de principio que desempeña este carácter proporcional en la aplicación de las figuras que restringen derechos; de igual manera se analiza la prisión preventiva como una medida cautelar procesal en el ámbito penal y su condición de excepcionalidad que debe ser respetada al momento de su evaluación, siendo finalmente el análisis de los plazos que se proyectan sobre la prisión preventiva para asumir su carácter de racionalidad.

Como se puede apreciar existe una base teórica que funda la pretensión de esta investigación puesto que sirve para la evaluación de la

realidad, lo cual se ha realizado en el Capítulo Cuarto en el que se muestran los resultados y su respectivo análisis, dando como resultado la presencia de ineficiencia en el desarrollo de la motivación de las resoluciones judiciales respecto a la proporcionalidad y la razonabilidad del plazo establecido. Todo este cúmulo de información se discute y en el Capítulo Quinto para lograr con ello la postura del investigador a través de las cuales se proyecta la determinación final de la tesis, elemento que permite establecer el enlace entre los objetivos y las conclusiones a las que se arriba en esta investigación.

El autor.

Capítulo I

Los aspectos metodológicos de la investigación

1.1. El planteamiento del problema

El sentido de este análisis resulta de interés en tanto que la situación de control que se supone debería ejercerse al momento de la aplicación de esta medida cautelar no supera la cuota de idoneidad. Es tanto así tal situación que las condiciones en las que se desarrolla el proceso penal a este nivel determinante de la prisión preventiva se ha tornado como una cuestión de ejercicio común, dado que se casi una costumbre el hecho de que se deba aplicar la medida cautelar que restringe derechos con el fin de solventar adecuadamente la investigación.

Para este tipo de actividad es importante considerar la participación activa de los principios como es el caso de la proporcionalidad que acompañado de la motivación debida que es exigible para todas las resoluciones que se emiten en sede judicial, ello con el fin de lograr un cierto tinte de control sobre esta medida cautelar y su aplicación desmedida. Sobre todo, este control es con la intención de que se mantenga el margen de regla y excepción que siendo esta última característica puntual perteneciente a la prisión preventiva, debería tener como resultado una mínima aplicación, tal cual el sentido de la intervención del derecho penal para restringir derechos.

La investigación describe los criterios adoptados por el juzgado de investigación preparatoria de San Ignacio durante los meses de enero a junio del año 2022, en lo que se refiere a la motivación de los autos que declaran fundado un requerimiento fiscal de prisión preventiva; específicamente se revisa la motivación de la proporcionalidad y la duración del plazo razonable, donde se podrá advertir los diferentes matices y el desarrollo del criterio judicial al momento de justificar la duración del plazo de la medida de coerción personal por excepcionalidad, como lo es la prisión preventiva.

Se proyecta como resultado de este análisis el reconocimiento de los factores que estarían afectando el control sobre el debido proceso en esta instancia judicial, permitiendo con ello la determinación sobre la suficiencia motivacional, a fin de ubicar un tipo de solución a dicho problema.

1.2. La formulación del problema

¿Qué efectos produce la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022?

1.3. La justificación de la investigación

Construir esta proyección académica obedece a un criterio justificante en función a la necesidad de establecer control, lo cual opera desde una perspectiva social, esto es que se constriñe al resguardo de los derechos que

le asisten a todo ciudadano sobre todo en función a la presunción de inocencia y su propia dignidad en tanto que al no haberse demostrado su real participación y responsabilidad en los actos imputados, sus derechos deberían permanecer intactos en el ejercicio que les corresponde.

Vale decir que de este sentido social también se parte para alcanzar una justificación de tipo legislativa, en tanto que esta investigación se orientará a la revisión de la normativa jurídica que se ocupa de la medida cautelar de prisión preventiva a fin de verificar si existe algún factor determinante que estaría provocando la aplicación de la medida como una regla antes que como lo que realmente le corresponde, una excepción. Es importante considerar el hecho de que en función a esta verificación se podrá establecer luego si la aplicación del principio de proporcionalidad tiene un asidero legal que respalde su resultado, esto quiere decir que es posible que la regla tal cual se encuentra construida estaría generando un espacio de aplicación excesiva.

1.4. La importancia de la investigación

Lo señalado como justificación que es la base de la investigación proyectada, sirve de orientación para establecer el criterio de importancia del estudio, es así que la secuencia de análisis en virtud de la proporcionalidad, dará cabida al reconocimiento de los factores que estarían provocando este aspecto desmedido en la aplicación de la medida cautelar. Por lo mismo que se espera que con tal resultado se oriente una sugerencia de cambio, cuando menos en el criterio de proporcionalidad aplicado y que debiera estar debidamente plasmado en las resoluciones que establecen esta medida en

función al estricto carácter excepcional, a fin de alcanzar con ello la debida motivación, contemplando así que se presenten las razones explícitas y justificantes de esta medida. Actividad que permitirá alcanzar un beneficio general puesto que favorece a toda la sociedad, así como un beneficio particular a quienes están inmersos en los procesos judiciales.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

- Determinar el efecto que produce la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Estudiar los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales.
- Describir los parámetros jurídicos para determinar la proporcionalidad y el plazo razonable en la aplicación de la prisión preventiva.
- Analizar los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable.

1.6. La hipótesis

La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable generan un efecto de vulneración de los derechos que incorpora el debido proceso, evidenciado en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

1.7. Las variables

1.7.1. Variable independiente

La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable.

1.7.2. Variable dependiente

Debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

Es prudente indicar que esta investigación en tanto que se trata de una de corte no experimental, dado que no se alteran o modifican las variables, resulta de utilidad la aplicación de métodos vinculados con el ámbito jurídico que es precisamente el área en que se analiza la realidad, lo cual se basa en la observación, puesto que no se realiza ningún experimento sobre dicha realidad. La verificación de las condiciones en las que se produce el fenómeno se ha orientado hacia el análisis de las reglas, que como tal existen en el ordenamiento jurídico penal adjetivo, dado que condicionan el resultado mediante su aplicación.

Esta evaluación no solo se centra en lo concerniente a su propio contenido sino también al enlace con la realidad, esto es la manera en que los operadores de justicia se sirven de ella para atender los casos conflictivos que emanan de las relaciones sociales y deben ser atendidas según su gravedad por la intervención del Ius Puniendi. A este nivel se debe considerar de cuidado el hecho de la verificación de los niveles de afectación de los derechos, de manera muy especial se encuentra en ese sentido la evaluación de los presupuestos y exigencias de razonabilidad respecto a la viabilidad de aplicar la prisión preventiva como medida cautelar.

Esta condición se somete a la crítica en tanto que lo mostrado en la situación jurisdiccional en torno a este tema de la evaluación tanto de los

presupuestos básicos de la prisión preventiva, así como su condición proporcional, sugiere como ineficiente a tal desarrollo alterándose con tal resultado la situación jurídica del imputado quizá de manera innecesaria. Esto se advierte en función de que el resultado de la evaluación se vincula con los aspectos más saltantes como principalmente se basa en la restricción de la libertad personal del imputado.

Esta evaluación se ha de someter al criterio de los magistrados, en tanto que son ellos los llamados a establecer el control necesario sobre la imputación que sugiere o postula el representante del Ministerio Público, la vinculación de los elementos que resultan como inapropiados o insuficientes respecto a la motivación, requirió de la participación de métodos tanto de análisis de la realidad como el de la observación, además de la interpretación de las reglas a nivel exegetico y sistemático, lo cual se refuerza con el método lógico que permite enlazar los resultados de manera coherente hasta llegar a la determinación final de la tesis.

1.8.1. Método de interpretación exegetica jurídica

Como se ha explicado anteriormente esta fase de la investigación se ha servido de la evaluación de las reglas procesales y las indicaciones que orientan a la garantía del debido proceso, lo cual se advierte como la principal pauta para que se pueda controlar el requerimiento de prisión preventiva desarrollado por el Ministerio Público, esta condición de observación se

traslada hacia el contexto de la literalidad de las reglas, lo cual permite conocer el verdadero sentido o acercarse a la intención de quien ha creado dicha regla. Desde luego existe vinculación con el carácter de seguridad jurídica que debería ostentar la acción de control, por lo mismo que se debe comprender de manera gramatical cada una de las reglas, a fin de no ir más allá de la condición objetiva de las mismas.

1.8.2. Método de interpretación jurídica sistemática

Se ha optado por la utilización de este método en tanto que los elementos normativos deben tener el alcance constitucional necesario para ofrecer una verdadera garantía, lo que supone el vínculo entre la pauta de control adjetivo y la propia normativa constitucional, es así como se verifica si es posible su congruencia y aplicación dentro del sistema jurídico donde se incorpora. Es precisamente este nivel de observación lo que permite consolidar el carácter garantista de toda propuesta, esto quiere decir que resulta de utilidad la interpretación sistemática de las pautas que sirven para evaluar la prisión preventiva, lo cual debería tener un resultado de congruencia, que, al no producirse de este modo, se verificaría la falta de enlace que sin duda alguna trae como consecuencia vulneración de derechos.

1.8.3. El método lógico jurídico

Se aprecia de este método un aporte importante, en tanto que bajo la secuencia que sugiere para el desarrollo de la investigación científica, permite

enlazar de manera coherente cada una de las fases de la tesis, es así que surge el vínculo entre las variables y la configuración del objetivo general, el mismo que para alcanzar su finalidad se ha servido de la intervención de los objetivos específicos. La materialización de las tareas impuestas mediante estos últimos condujo a la incorporación de los materiales y elementos necesarios tanto teóricos, así como el resultado de la observación de la realidad que consolidan la postura del investigador.

Esta secuencia finalmente da por sentada la determinación final de la tesis, la misma que termina vinculada directamente con las variables planteadas inicialmente por la tesis, siendo así en base a ello se elaboran las conclusiones y recomendaciones, esta indicación permite generar la vinculación entre cada uno de los objetivos y las conclusiones que se plasman al final de la investigación.

Capítulo II

El fundamento para la motivación de las resoluciones judiciales

2.1. Los trabajos previos a la tesis

Se ha tenido en cuenta la tesis de Prokopiuk Reategui Angela Eliane y Torres Padilla Anayka Helany (2021) que lleva por título “Aplicación del control de constitucionalidad para la prisión preventiva y sospechas fundadas y graves en la casación N° 2912-2019/Lambayeque”, presentada para obtener el título profesional de Abogado ante la Universidad Científica del Perú, de la cual se ha extraído la siguiente información:

“El nivel del control de constitucionalidad aplicado en la decisión de prisión preventiva en la casación N° 292-2019/Lambayeque; debido a su carácter excepcional, solo puede ser dictada cuando concurren una serie de presupuestos entre los cuales se encuentran los fundados y graves elementos de convicción que corroboren la imputación y existan actos concretos que el imputado va perpetuar su fuga y evadir la acción de la justicia. De esta manera, el contenido constitucional protegido del derecho fundamental a la libertad, está garantizado por el bloque de constitucionalidad conformado por la constitución y las interpretaciones que realizada el tribunal constitucional al referido derecho”. (Prokopiuk & Torres, 2021, pág. 47)

También ha sido considerada la investigación de Muñoz Egusquiza Deborah Esther (2021) que lleva por título “La escasa motivación desnaturaliza la prisión preventiva, incumpliendo el Art. 139 de la Constitución Política del Perú”, presentada a la Universidad Señor de Sipán para obtener el título de Abogada, de la cual se ha extraído la siguiente conclusión:

“Se llegó a determinar que, al desnaturalizar la prisión preventiva por la escasa motivación, la cual lega afecta a los derechos establecido por la Constitución Política del Perú, principalmente los principios de administración de justicia y el derecho de libertad del individuo”. (Muñoz, 2021, pág. 104)

Debe tomarse en cuenta la postura adoptada por el investigador Víctor Herminio Lizárraga Bárcena (2018), quien en su tesis titulada “Análisis de la proporcionalidad de la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva en los procesos de criminalidad organizada”, presentada a la Universidad Nacional de Piura, para obtener el título profesional de Abogado, de la misma que se ha seleccionado la siguiente conclusión:

“La proporcionalidad y razonabilidad de todo plazo prisión preventiva se determina de forma concurrente o a posteriori. En consecuencia, no es posible decir que los plazos máximos legales de prisión preventiva no son proporcionales ni razonables”. (Lizárraga, 2018, pág. 64)

Es importante también considerar la investigación de Haydée Gabriela Chávez Morales y Luis Oscar Valdivia Flores (2018) que lleva por título “Eficacia de los criterios del Tribunal Constitucional, en el ámbito de la motivación del plazo razonable de la prisión preventiva, en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca”, presentada a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca para obtener el título profesional de Abogado, de cuyo trabajo se ha recogido la siguiente conclusión:

“Los magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, vienen vulnerando el derecho al plazo razonable de la prisión preventiva y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en tanto se advierte que hay una motivación insuficiente de la duración de la prisión preventiva, dando lugar a que los abogados defensores interpongan un recurso de apelación e incluso un hábeas corpus, para garantizar el derecho fundamental a la libertad personal de los investigados”. (Chávez & Valdivia, 2018, págs. 125-126)

2.2. La motivación como parte de la argumentación jurídica

Una primera consideración, es que la debida motivación en las resoluciones judiciales desempeña un papel crucial en el sistema legal, ya que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas; esta práctica se basa en el principio del debido proceso legal y el derecho a la defensa, lo que significa que los jueces deben proporcionar una justificación clara y razonada de su decisión.

Acerca de la utilidad de este derecho-principio, la autora Chiquihuanca (2019) señala que la adecuada motivación en las resoluciones judiciales cumple dos roles: uno interno al proceso y otro externo.

En el ámbito interno, actúa como una herramienta técnica que desglosa el razonamiento detrás de la sentencia, permitiendo a las partes ejercer su derecho de defensa y presentar apelaciones al identificar las bases de la decisión. Por otro lado, en el aspecto externo, sirve como un mecanismo político e institucional que permite a la sociedad supervisar formalmente el comportamiento y las decisiones de los jueces, incluso determinar su responsabilidad, esta función proporciona a la sociedad la capacidad de vigilar y examinar las decisiones judiciales para asegurar su corrección. (págs. 26-27)

Ahora bien, la motivación implica no solo la aplicación de principios y reglas legales, sino también la argumentación de cómo se relacionan con los hechos del caso en cuestión, explicación que, en términos de Aya (2020) “no solo permite a las partes comprender las razones detrás de una decisión, sino que también facilita el proceso de apelación permitiendo la identificación de errores en la aplicación de la ley o en la valoración de las pruebas”. (pág. 40)

Asimismo, contribuye a mantener la confianza en el sistema judicial y a prevenir la arbitrariedad al establecer una justificación lógica y

fundamentada para cada veredicto; en última instancia, la motivación se traduce en la equidad y la percepción de justicia en el sistema legal.

No obstante, autores como Rafael de Asís (2005), advierten que: “una decisión judicial no es el producto de un proceso mecánico; la toma de decisiones basada en declaraciones legales siempre implica un grado de valoración, lo que hace necesario expresar claramente la decisión y sus fundamentos”. (pág. 75)

Sin duda, esto es esencial para promover la efectividad del derecho a través de la comprensión de su aplicación en casos concretos. Por consiguiente, “esta necesidad de expresar la decisión se justifica tanto desde una perspectiva de eficacia técnica, cumpliendo con requisitos de coherencia, publicidad y apego a ley, como desde una perspectiva de eficacia real, al garantizar el cumplimiento de la legalidad”. (Aya Otazu, 2020, págs. 54-55)

En nuestra realidad jurídico nacional, investigadores como Ramos & Gonzáles (2019), quienes han abordado la problemática referida a la insuficiente motivación en decisiones o resoluciones judiciales; así pues, luego de analizar los criterios fácticos utilizados por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba en 2017, llegan a la conclusión que, “resulta evidente que estos criterios son insuficientes; debido a que su enfoque se reduce a una valoración superficial de los hechos presentados en cada caso, sin un razonamiento más amplio que respalde la decisión” (pág. 30).

Según los citados autores, el Juez del órgano jurisdiccional centro de análisis de la investigación, parece apresurarse al afirmar que la evidencia presentada por el fiscal demuestra la comisión de un delito e incluso especifica la pena que se impondrá al acusado, sin haber realizado previamente una evaluación judicial de la pena, teniendo en cuenta el grado de participación del acusado.

Similares resultados, obtuvo Valentín Gonzáles (2018), al abordar la motivación de las resoluciones de prisión preventiva en Juzgados de Huaraz, llegando a determinar que: “(...) las deficiencias en la motivación de las decisiones judiciales relacionadas con la prisión preventiva incluyen la falta de una justificación completa y adecuada para el caso específico; esto abarca argumentos basados en hechos, argumentos legales y consideraciones valorativas”. (pág. 100)

De igual forma según el autor, las sentencias carecen de una estructura sólida y coherente, ya que no aplican de manera rigurosa los principios lógicos relevantes ni las reglas lógicas que se aplican a los tipos de inferencias, tanto en términos de enumeración como de aspectos legales.

En síntesis, es posible manifestar que las resoluciones judiciales relacionadas con la prisión preventiva y las sentencias en sí, a menudo carecen de una motivación adecuada, planteando preocupaciones significativas en el ámbito legal. Esto impacta en la justicia y la transparencia del sistema judicial, ya que una motivación deficiente puede llevar a decisiones basadas en prejuicios en lugar de hechos y pruebas concretas; al

mismo tiempo, dificulta el proceso de apelación y socava la confianza pública en el sistema legal.

La falta de una motivación sólida también puede debilitar el estado de derecho y la separación de poderes. “Por lo tanto, es crucial mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, especialmente en casos de prisión preventiva, para garantizar un sistema judicial justo, equitativo y confiable”. (Valentín Gonzáles, 2018, pág. 60)

2.3. Finalidad de las resoluciones judiciales

Chuquihuanca (2019), citando a Calamandrei, infiere que: “(...) la motivación en las resoluciones judiciales constituye un elemento esencial y distintivo de las responsabilidades que recaen en los órganos jurisdiccionales” (pág. 22). De ese modo, las resoluciones judiciales cumplen una función esencial en el sistema legal, y su finalidad es multifacética; pues, en primer lugar, buscan garantizar la justicia en los casos en cuestión, basándose en la aplicación imparcial de las leyes y el respeto de los derechos de todas las partes involucradas.

Asimismo, estas decisiones tienen como objetivo resolver disputas legales entre partes en conflicto, ya sean de naturaleza civil, penal, laboral u otro tipo. Por consiguiente, al hacerlo, contribuyen a poner fin a la controversia de manera justa y legal, lo que es esencial para mantener la estabilidad en la sociedad, además, “las resoluciones judiciales pueden establecer precedentes legales, brindando orientación para casos futuros y

fomentando la coherencia en la aplicación de la ley”. (Aya Otazu, 2020, pág. 47)

De igual modo, “las resoluciones judiciales juegan un papel importante en la protección de los derechos fundamentales, asegurando que las garantías constitucionales y los derechos humanos se respeten durante el proceso judicial” (Liza Castillo, 2022, párr. 4). Pues, de forma general las decisiones judiciales deben ser transparentes y bien fundamentadas, lo que facilita la rendición de cuentas y permite a las partes y al público comprender las razones detrás de una decisión, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema legal y la confianza en la justicia.

La motivación en las resoluciones judiciales se considera una regla fundamental en el Derecho procesal, ya que su importancia radica en exponer las razones detrás del fallo del juez, demostrando que la decisión no es arbitraria, sino que se basa en una función judicial. En consecuencia, según el Diccionario de Derecho Usual, Tomo III., de Guillermo Cabanellas (1998), “una resolución judicial se define como la decisión tomada por un juez en el contexto de un proceso litigioso que surge a partir de la acción de una de las partes o de una actuación de oficio”. (pág. 117)

En este contexto, el autor nacional Chuquihuanca (2019) citando a James Goldschmidt concuerda en que: “las decisiones judiciales son emitidas por el juez de forma deliberada con el fin de evaluar si la decisión previamente tomada se ajusta a los principios de justicia”. (pág. 22)

En cualquier caso, del expediente N° 458-2001-HC/TC, se pueden identificar las siguientes acciones que fundamentan las decisiones judiciales:

En primer lugar, se busca asegurar que las funciones judiciales se realicen con razonabilidad, lo que implica que las decisiones son el resultado de un análisis crítico y no se toman de manera arbitraria. En segundo lugar, se promueve la facilitación del ejercicio del derecho de defensa para ambas partes en el proceso, garantizando que los recursos utilizados sean apropiados y adecuados. (Fund. 2)

En este fundamento, se destaca la importancia de que las decisiones judiciales sean fundamentadas y no arbitrarias; para lograrlo, se subraya la necesidad de un análisis crítico en la toma de decisiones, lo que garantiza que las resoluciones sean justas y basadas en evidencia. Además, se resalta la importancia de que ambas partes en el proceso tengan igualdad de oportunidades para ejercer su derecho de defensa, lo que implica un control riguroso de los recursos utilizados para asegurar que se utilicen de manera adecuada y justa.

2.4. Las resoluciones judiciales y su motivación

Es importante dar inicio a esta fase descriptiva con el concepto de la motivación y es así que se encuentra un acercamiento a ello cuando se indica que “Desde el punto de vista deóntico, específicamente desde el punto de vista del *deber-ser jurídico*, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, instituido por la norma jurídica de máxima

jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional” (Mixán Mass, 1987, pág. 193). Según lo planteado ha de entenderse a esta labor bajo una condición puntual para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, en tanto que es a los magistrados que corresponde establecer el orden normativo a través del control que ejercen las reglas mediante su aplicación frente a los conflictos que se deriven de las relaciones sociales.

Luego para el caso de las resoluciones judiciales en las que se impone la medida cautelar bajo estudio, aplica el criterio de motivación jurisdiccional en tanto que corresponde a los magistrados usar este tipo de criterio, así “la motivación de la decisión sobre la aplicación de la prisión preventiva determina la idoneidad de la medida en un caso concreto, ya que su existencia solo puede comprobarse justificando adecuadamente las razones que justifican esta medida”. (Castillo, 2005, pág. 257)

Es importante el desarrollo de esta actividad de manera correcta en tanto alcanza a la protección de los intereses de la sociedad en pleno, no solo de aquellos que participan en el desarrollo de un proceso penal, es por ello que esta característica de la actividad jurisdiccional resulta de exigencia en tanto que “La motivación de las resoluciones garantiza a los ciudadanos el acceso a decisiones explícitas y sólidas en relación con las pretensiones y las alegaciones postuladas, lo que permite especialmente

el ejercicio del derecho de defensa y de pluralidad de instancia”. (Liza, 2022, pág. 302)

Capítulo III

La proporcionalidad y el plazo razonable en la prisión preventiva

El control que se presume debe ejercer cada principio del derecho incorporado como parte de la estructura de la investigación penal, tendría que ser verificado de manera exacta por parte de la propia acción de los magistrados, ello no siempre ha resultado de este modo, por lo mismo que cobra vigencia el hecho de que existan estas reglas de optimización para que la aplicación del derecho se haga de la manera más correcta posible.

En tal sentido, la pauta que delimita la acción de la judicatura siempre habrá de depender de ciertos criterios los mismos que se orientan hacia un control como es el caso de la proporcionalidad, es así que “El control de proporcionalidad mediante el examen de idoneidad y necesidad se realiza durante el análisis de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, en tanto que el examen de ponderación se realiza al final (expost). Se expresa los motivos suficientes para decidir de manera racional sobre el principio que pesa más en el caso concreto. Esto sin afectar la libertad física de los investigados o en su defecto limitar la persecución penal efectiva a cargo de la fiscalía”. (Palli Calla, 2020, pág. 215)

La condición de proporcionalidad que debe acompañar a la decisión de establecer la medida cautelar, deberá ser bastante cuidadosa en su diseño y estructura, ante lo cual resulta de utilidad también la motivación que termine por justificar el criterio que se adopta para restringir los derechos del imputado, es así que deben existir topes para tal acción, esto es que “Se deben establecer límites a la aplicación de la prisión preventiva. No debemos perder de vista que el principio de necesidad de la pena representa que no es válido aplicar penas innecesarias. Ya en 1789 el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano⁶ anotaba que la ley no debe establecer otras penas que las estrictamente y evidentemente necesarias”. (Goicochea, 2019, pág. 25)

Debe entenderse este control que se basa en reglas de orden convencional, que existen pautas específicas que permiten establecer un orden, puesto que la sola existencia de la estructura legislativa no es suficiente para genere un sistema de justicia eficaz, se precisa además de una secuencia de actos de control que se orienta a la aplicación de principios, que van de la mano con el sistema constitucional. Es por ello que se presume adecuado este tipo de control destinado a establecer reglas generales a fin de que los estados pueda asumir un rol de control sobre la criminalidad sin dejar de lado el respeto irrestricto de los derechos que le asisten a toda persona en tanto no se haya demostrado fehacientemente su responsabilidad penal.

Es así como se indica que “La regla –derrotero– para la imposición de un mandato de prisión preventiva está compuesta por dos principios específicos, el primero referido a la proporcionalidad de la medida y el segundo a la debida motivación de las decisiones fiscales, esto en el extremo de considerar como base la libertad personal, lo cual constituye un derecho humano y fundamental que solo puede ser objeto de limitación por una decisión judicial o fiscal que tenga un alto nivel de detalle y de motivación respecto de los cargos que se pretenden imputar al investigado, en mérito de que es necesaria una sospecha grave de la comisión del ilícito. Por tanto, tendrá la calificación de legítima la imposición de una medida de coerción personal como la prisión preventiva cuando cumpla con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado peruano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios vinculantes establecidos por sus respectivos máximos intérpretes”. (Moscoso, 2020, págs. 495-496)

3.1. La proporcionalidad como principio en el proceso penal

El principio de proporcionalidad en el proceso penal es un pilar fundamental que rige la toma de decisiones en el sistema de justicia. “En esencia, este principio busca garantizar que las medidas adoptadas por las autoridades judiciales y policiales sean proporcionales a los objetivos perseguidos y que no resulten excesivas en relación con los intereses en juego”. (Fuentes Cubillos, 2008, pág. 26)

Conforme a lo manifestado por el Dr. Castillo-Córdova (2004), “la aplicación de este principio en el Derecho Penal es de vital importancia, pues sirve como salvaguardia contra el uso indebido de la autoridad estatal y garantiza que los derechos fundamentales de los acusados sean respetados durante el proceso”. (Castillo-Córdova, 2004, pág. 4)

De otro lado, es necesario manifestar que uno de los aspectos más destacados en los que la proporcionalidad se manifiesta es en la imposición de las penas; “la sentencia en un caso penal debe ser proporcional a la gravedad del delito y al grado de culpabilidad del acusado, esto significa que no se deben imponer penas excesivas o desproporcionadas en relación con la infracción cometida” (Pérez Sánchez & Cabrejo Villegas, 2021, pág. 5). Pues, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la jurisprudencia consistente de Tribunales Internacionales han indicado que imponer penas excesivas se considera una violación de los derechos humanos; esto se debe a que las penas desmedidas pueden dar lugar a sentencias que son percibidas como injustas y crueles, lo que contradice los principios fundamentales de los derechos humanos.

Además, el principio de proporcionalidad también se extiende a las medidas cautelares, como la prisión preventiva; sin embargo, el sistema penal no debe usar la prisión preventiva de manera desproporcionada o excesiva, tal como viene ocurriendo en la última década. En esto punto, es necesario recordar que esta medida sólo debe ser necesaria para asegurar la comparecencia del acusado en juicio o para proteger la sociedad de un riesgo real y significativo. Pues, tal como advierte Martínez (2021), “la prisión

preventiva injustificada puede resultar en violaciones de derechos fundamentales y puede ser perjudicial para el acusado”. (pág. 38)

Del mismo modo, al dictar un fallo, ya sea una sentencia o cualquier resolución judicial, este principio debe ser considerado por el magistrado, dado que, tal como argumentan Pérez & Cabrejo (2021), “Existe una correlación significativa entre los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación y justificación de las penas en el sistema legal” (pág. 70). En otros términos, a medida que se perfecciona la aplicación de estos principios, proporcionalidad y razonabilidad; las sentencias penales se vuelven más justas, respaldadas por argumentos técnicos y legales sólidos.

A manera de finalizar este acápite debemos señalar que, la proporcionalidad como principio en el proceso penal es esencial para garantizar que las decisiones judiciales y las acciones de las autoridades sean razonables y justas; este principio protege los derechos fundamentales de los acusados y mantiene la equidad en el proceso penal, lo que es fundamental para la legitimidad del sistema de justicia.

3.2. La prisión preventiva como medida cautelar en el proceso penal

La prisión preventiva es una herramienta poderosa en el sistema judicial que permite la detención de un individuo antes de un juicio, sin embargo, su uso indiscriminado puede tener consecuencias graves, socavando los derechos fundamentales y la justicia. En el Perú, la prisión preventiva se rige por el principio de ser una excepción y no una regla general;

siendo este, un enfoque esencial para mantener el equilibrio entre la justicia y la libertad individual. Esta medida cautelar se utiliza con el propósito de asegurar que, “el acusado comparezca al juicio, evitar que interfiera con la investigación, o proteger a la sociedad de un riesgo real y significativo” (Loza Avalos, 2013, pág. 8). En resumen, la prisión preventiva, en teoría, debe ser aplicada de manera excepcional, provisional y cautelosamente.

Pues de no ser así, la incorrecta implementación de esta medida cautelar generaría en la sociedad una falta de confianza total en el cumplimiento de las normativas en un proceso penal, pues los ciudadanos se sentirían inseguros acerca de la discrepancia entre lo establecido en las leyes y lo que es ejecutado por las autoridades competentes. Para Macías (2019), “esto puede ser exacerbado por diversas influencias políticas que priorizan la aplicación de esta medida por encima del derecho a la libertad, en respuesta a la creciente preocupación sobre la delincuencia en el país”. (pág. 81)

En ese sentido, la prisión preventiva se justifica cuando existen circunstancias que hacen que la libertad del acusado represente un peligro para los intereses de la justicia o la sociedad; acerca de los presupuestos de esta medida, han sido establecidos en el Art. 268 del Código Procesal penal,

- a) Los graves y fundados elementos de convicción permitan considerar razonablemente la comisión de un delito en el que el imputado esté involucrado como autor o partícipe;
- b) Una pena potencial de más de cuatro años de privación de libertad; y, c) El imputado, en virtud de su historial previo y

otras circunstancias particulares del caso, sugiere de manera razonable que intentará evadir la acción de la justicia (peligro de fuga) o interferirá en la búsqueda de la verdad (peligro de obstaculización);

Lo mencionado anteriormente se encuentra en conformidad con la modificación vigente establecida por la Ley N.º 30076, de fecha 19 de agosto de 2013; y, “los dos últimos criterios establecidos en la sentencia de Casación N.º 626-2013/Moquegua, de fecha 27 de febrero de 2016, que son la proporcionalidad y el plazo de la prisión preventiva en sí”. (Alerta Informativa, 2019, párr. 1)

Resulta fundamental que la prisión preventiva se aplique con prudencia y se ajuste a principios fundamentales de justicia, como el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso. Es decir, debe ser una medida de seguridad provisional y proporcional, por ende, su duración debe ser limitada, ya que su aplicación prolongada puede afectar gravemente los derechos del acusado. Además, el sistema legal debe garantizar que los acusados tengan acceso a defensa legal y revisión judicial periódica de la necesidad de mantener la prisión preventiva.

En conclusión, esta medida cautelar representa una herramienta poderosa en el proceso penal, pero debe utilizarse con extrema cautela y ser la excepción en lugar de la regla. Sarango & Vivanco (2018) refieren que, “su abuso puede tener consecuencias graves en términos de derechos humanos y

justicia, por lo que es fundamental equilibrar la necesidad de la medida con el respeto a los derechos de los acusados”. (pág. 15)

3.3. La excepcionalidad de la prisión preventiva

En primer lugar, el principio de que la prisión preventiva es una excepción garantiza que se respete el derecho a la presunción de inocencia; en un ordenamiento legal garantista como el nuestro, toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, al menos así lo establecen las diversas disposiciones legales. Entonces, “(...) la prisión preventiva, al privar a alguien de su libertad antes de un juicio, debe basarse en circunstancias excepcionales y sólidas pruebas de que la persona representa un riesgo real para la sociedad o un peligro de fuga” (Loza Avalos, 2013, pág. 12); este enfoque garantiza que la carga de la prueba recaiga en la acusación y evitarse la inversión de la presunción de inocencia.

Dicho esto, la excepcionalidad de la prisión preventiva también actúa como un antídoto contra el abuso de poder y la arbitrariedad, verbigracia, la privación de libertad de un individuo es una medida trascendental que debe basarse en una evaluación adecuada de la situación. Por consiguiente, en un sistema judicial donde la prisión preventiva se utiliza como regla general tal como ocurre en nuestra realidad jurídico-procesal, existe evidentemente un riesgo significativo de que se produzcan detenciones injustas, motivadas políticamente o por presión social.

Tal razón es la que motiva a doctrinarios y juristas locales quienes vienen sugiriendo de manera constante que, la aplicación cuidadosa de la

prisión preventiva como excepción es crucial para proteger los derechos humanos y la dignidad de los procesados. Esto debido a que la prisión preventiva, se viene utilizando de manera rutinaria o excesiva en los Juzgados de Investigación Preparatoria en todo el Perú, lo que ha desencadenado una sobrepoblación carcelaria, además de la congestión del sistema judicial y la vulneración de los derechos de los detenidos; siendo que, en muchos casos, las personas privadas de su libertad en mérito a una medida cautelar, pueden pasar meses o incluso años en prisión preventiva antes de un juicio, lo que plantea preocupaciones significativas sobre la justicia y los derechos humanos.

Similar situación acontece en Colombia, donde, durante un largo período de tiempo, en el contexto del sistema judicial, tal como señala Granados (2013) “prevaleció la creencia de que, *un auto de detención no se le negaba a nadie*, esta afirmación no constituía simplemente una broma entre abogados, sino que reflejaba de manera evidente la irrisoria importancia otorgada al derecho a la libertad” (pág. 2). Toda vez que su restricción en el marco de los procesos penales era considerada como la norma general en lugar de una medida excepcional.

En definitiva, pese a resultar innegable que la prisión preventiva, aplicada como una medida excepcional se encuentra establecida en la legislación tanto nacional como internacional, empero, no se pone en práctica de inmediato en los procedimientos judiciales. Como señala Párraga (2019), “esto resulta en la vulneración de derechos constitucionales, en particular el derecho a la libertad, y representa una interpretación desviada de la normativa

vigente” (págs. 80-81). Este hecho se hace evidente al revisar la mayoría de los casos judiciales penales archivados en diversas jurisdicciones, donde se puede constatar que la regla general no es la salvaguarda del derecho a la libertad, sino la aplicación de una medida cautelar que restringe dicho derecho.

Como punto final de esta reflexión, cabe destacar que el principio de que la detención preventiva debe ser excepcional por ser intrínseco a su naturaleza jurídica. Razón por la cual, “(...) en un Estado moderno como el actual, que acata los principios de los derechos humanos; la idea de aplicar la detención preventiva de manera generalizada resulta inaceptable”. (Granados Peña, 2013, pág. 29)

3.4. Los plazos de la prisión preventiva y su determinación

En el contexto nacional, Chávez-Tafur, Ravelo, Grández, et al. (2013), sostienen que: “la naturaleza provisional o transitoria de la prisión preventiva está íntimamente vinculada al derecho de no ser sometido a un proceso penal ni retenido en prisión por períodos injustificadamente prolongados”. (pág. 35)

Según lo destacado por Chacón (2016), el derecho a un plazo razonable se considera un derecho subjetivo consagrado en la Constitución Política; esto significa que, “se trata de una garantía otorgada a todos los acusados en procesos penales, y es responsabilidad de los poderes judiciales y fiscales actuar dentro de un período de tiempo razonable y asegurar el respeto al derecho a la libertad”. (pág. 67)

En otras palabras, este derecho asegura que el proceso penal se lleve a cabo de manera oportuna y eficiente, y que los acusados no sean detenidos o sometidos a un proceso largo y prolongado que no tenga justificación; la idea detrás de este derecho es garantizar que las personas no sean sometidas a detenciones preventivas excesivamente largas sin un juicio justo y oportuno. Por consiguiente, las autoridades judiciales y fiscales deben trabajar en tiempo y forma para respetar este derecho fundamental de las personas acusadas en procesos penales.

En el Perú, los plazos de la prisión preventiva son determinados en un primer momento por el fiscal a cargo de las investigaciones, considerando el tiempo necesario para que el acusado comparezca en las investigaciones preliminares y a su vez, participe en las fases que incluyen la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Además, estos plazos se extienden hasta el juicio oral, es decir, la etapa de juzgamiento; donde, en caso de ser declarado culpable de los cargos que se le imputan, se le impondrá una pena de acuerdo con las leyes aplicables.

Este plazo generalmente se solicita dentro del requerimiento de prisión preventiva, que se expone ante los órganos jurisdiccionales competentes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 272°, numeral 1, del Código Procesal Penal, siendo el plazo más solicitado por los representantes del Ministerio Público, el período de nueve meses; empero, también hay fiscales que dependiendo el caso en concreto suelen solicitar entre seis a ocho meses en su requerimiento. Además, el numeral 2 del citado artículo establece

que, para procesos más complejos, el periodo no deberá durar más de dieciocho meses.

No obstante, el artículo 274° del Código Procesal señala la posibilidad de una extensión adicional de 18 meses, previa presentación de una solicitud justificada por parte del fiscal; “en conjunto, esto equivale a un período total de 36 meses en casos en los que existan circunstancias especiales que dificulten la investigación preparatoria y haya un riesgo de que el imputado escape de la acción de la justicia” (Chávez-Tafur, y otros, 2013, pág. 35). Asimismo, el Art. 272°, numeral 3, establece que, en casos de crimen organizado, no debe superar los treinta y seis meses de plazo para la prisión preventiva.

Este plazo se determina en función a la necesidad de llevar a cabo las diligencias pendientes y necesarias que son mencionadas por el fiscal en el inicio de la investigación preparatoria. Además, se toma en consideración la posibilidad de que el acusado, en el ejercicio de su derecho a la defensa, pueda solicitar nuevas diligencias para aclarar los hechos. Es importante recordar que el plazo de prisión preventiva asegura al acusado hasta la eventual celebración del juicio oral y la emisión de una sentencia, que determine su inocencia o culpabilidad.

Por otro lado, en el plano del Derecho Convencional, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013), se establece que, “toda persona tiene el derecho a ser escuchada a lo largo de todo el proceso judicial, y esto debe ocurrir en un período de tiempo razonable”. (pág. 23)

Esto implica que la protección de los derechos de libertad se extiende al principio de un plazo razonable en la detención preventiva, considerando que esta es principalmente una medida preventiva y no una pena. Asimismo, la Corte Interamericana (2013) enfatiza que, “se deben considerar las razones fundamentales detrás de un proceso penal en general, lo que lleva a dicha Corte a establecer plazos máximos razonables para la prisión preventiva, evaluando la razonabilidad desde en un primer vistazo”. (Ibidem, pág. 45)

En síntesis, la prisión preventiva debe considerarse como una medida temporal dentro de límites de tiempo razonables, y el juez debe evaluar la racionalidad, teniendo en cuenta los plazos, las causas y los propósitos que justifiquen la privación de la libertad. Tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta medida no debe extenderse si no existen razones válidas que justifiquen una medida cautelar, ya que de lo contrario se violarían los derechos de libertad.

Capítulo IV

Análisis y resultados

4.1. Unidad de análisis

Población

En función a la propuesta de esta investigación se proyecta como población a los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio generados durante el año 2022.

Muestra

La muestra está determinada por la cantidad de 05 autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio generados durante el año 2022, basada en la teoría estadística de la conveniencia del investigador, aplicada en investigaciones no probabilísticas como en este caso al tratarse de una investigación no experimental de enfoque cualitativo. Muestra que permitirá reconocer el nivel de motivación que existe a nivel jurisdiccional respecto a la participación del control de proporcionalidad y el plazo razonable, con lo cual se logrará identificar el efecto que produce sobre el adecuado manejo del debido proceso en la investigación penal.

4.2. Guía de observación de la muestra

Para la evaluación de los autos de prisión preventiva recopilados según la muestra, se tendrá como guía la pauta establecida en el objeto de la investigación es así que se pretende en primer lugar reconocer la existencia de motivación suficiente para que se encuentre como justificada el filtro que corresponde a la proporcionalidad de la media que se ha de aplicar, así como también se verificará la existencia de justificaciones jurídicas válidas y explícitas que amparen la determinación del plazo bajo la condición de razonabilidad.

4.3. Resultado del análisis de los autos de prisión preventiva

Tabla 1: Resultado de la evaluación de los autos de prisión preventiva registrados en el juzgado de investigación preparatoria de San Ignacio en el Distrito Judicial de Lambayeque.

Expediente	Materia	Análisis
1. 051-2022-51-1706-JR-PE-01	Feminicidio en grado de tentativa	Se aprecia el acta de registro de audiencia de prisión preventiva en la que se da por instalada la audiencia de manera válida en tanto que no se presentaron observaciones, procediendo a la oralización del requerimiento de prisión preventiva de parte del Ministerio Público, luego se aprecia la resolución en la que se describe el pedido de la prisión preventiva y sus consideraciones, así

		<p>como los hechos que se atribuyen al imputado.</p> <p>Luego de ello se procede al análisis de los presupuestos materiales, donde luego de registrar la posición de la parte inculpada y el Ministerio Público, luego del análisis de los hechos de manera detallada se procede a indicar la presencia de un grado de sospecha fuerte respecto a este presupuesto inicial.</p> <p>En seguida se presenta el análisis de la prognosis de pena, indicando luego del debate que se cumple con el presupuesto teniendo en cuenta que si fiere considerada la responsabilidad del inculpado, la sanción al tratarse de un delito de tentativa de homicidio estaría superando los 4 años de sanción privativa respecto a su libertad.</p> <p>También se desarrolla el análisis del peligro procesal, haciendo el análisis en función al peligro de fuga del imputado señalando que estaría presente en virtud del arraigo domiciliario , el arraigo laboral</p>
--	--	--

		<p>y familiar, haciendo un análisis también sobre la gravedad de la sanción el cual se realiza en virtud de los demás resultados , para luego verificar las dimensiones de protección sobre el bien jurídico que se ha vulnerado con el delito así como el interés del inculpado para el resarcimiento del daño ocasionado, a ello se sumó el análisis del peligro de obstaculización, el cual se presenta como existente.</p> <p>Luego se aprecia el desarrollo de la proporcionalidad exigida como análisis constitucional respecto a la medida de prisión preventiva, el mismo que se desarrolla bajo la descripción de los tres sub principios, indicado de manera muy escueta sobre la idoneidad, indicando de manera puntual que se trata de la consideración del juez y describe lo que debe ser como concepto, mas no expresa de manera explícita la motivación exacta que sustenta su necesidad como medida idónea.</p>
--	--	--

		<p>Sobre el sub principio de necesidad vuelve a describir de manera conceptual lo que debería comprender esta evaluación del caso, pero no desarrolla de manera específica las condiciones que lo vinculan con la realidad del caso, para indicar sin motivación desarrollada que no hay otra medida que satisfaga de igual manera que lo haría la prisión preventiva.</p> <p>Luego desarrolla el sub principio de proporcionalidad propiamente dicho que solamente describe de manera conceptual sobre los aspectos que deben ser evaluados o considerados y señala únicamente la necesidad de erradicar la violencia de genero y contra la mujer, en sí la violencia familiar pero no desarrolla el vínculo de este control con los hechos de la realidad para tener una adecuada motivación, quedando el resultado sujeto a condiciones subjetivas.</p> <p>Se aprecia la evaluación de la realidad procesal vinculada con los actos de investigación que da por resultado en el</p>
--	--	--

		<p>criterio del juzgador para que se desarrollen actos específicos direccionados a la intervención de la víctima mas no del imputado, lo cual sale del marco de justificación de la prisión preventiva que precisa de asegurar la presencia del imputado.</p>
<p>2. Exp. 00212- 2021- 62- 1704- JR- PE-01</p>	<p>Violación De La Libertad Sexual (Tipo base)</p>	<p>Se verifica el acta de registro de audiencia de prisión preventiva en la que instalada la audiencia y ante la ausencia de observaciones sobre el caso en particular se presenta el Ministerio Público con el informe oralizado sobre el requerimiento de prisión preventiva, así como la intervención de la defensa técnica de la parte imputada, luego de lo cual se emite la resolución pertinente.</p> <p>En dicha resolución se indica la pauta normativa y se procede al análisis de los presupuestos para la determinación de prisión preventiva, que respecto a los graves y fundados elementos de convicción que da por cumplido según el criterio del juzgador.</p>

		<p>Luego respecto a la prognosis de la pena se tiene que en tanto la imputación del delito supone una sanción que supera los cuatro años de pena privativa de la libertad por lo mismo que se considera cumplido el presupuesto.</p> <p>Sobre el peligro procesal el análisis respecto a las condiciones que estarían provocando dicho riesgo en función al arraigo, considerando que al ser débil este último se presenta como característica el peligro procesal.</p> <p>Finalmente se observa la verificación de la proporcionalidad y necesidad de la medida cautelar, en cuyo caso se desarrolla conceptualmente la secuencia de análisis pero no se desarrolla de manera concreta la motivación que adecúe este análisis al caso específico, procediendo luego a la determinación del plazo respecto a la prisión preventiva el mismo que se ha reducido a la mitad de lo que solicitó el Ministerio Público.</p>
--	--	---

3. Exp. 0242- 2022- 8- 1704- JR- PE-01	Lesiones culposas agravadas	<p>Se verifica en este expediente la resolución en al que se analiza cada uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva indicando que respecto a los graves y fundados elementos de convicción, respecto a los cuales según el requerimiento de prisión preventiva de parte del Ministerio Público, el juez indica que se cumple con tales condiciones.</p> <p>Luego sobre la prognosis de la pena de acuerdo a la evaluación del delito que se imputa y en tanto que se trataría de un concurso real de sanciones, la operación de adicionarlas da como resultado una cantidad superior a los cuatro años de pena privativa de Libertad.</p> <p>De igual manera se analiza el peligro procesal desde sus aspectos más importantes en función al arraigo el cual esta ausente, por lo tanto cumpliría con esta condición para establecer prisión preventiva y cumplir con los fines del proceso.</p>
--	---	--

		<p>El desarrollo del análisis de proporcionalidad de la medida cautelar condicionado a la pauta del Tribunal Constitucional, indicando únicamente un desarrollo conceptual de lo que se significa este tipo de análisis sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, indicando en base a ello la procedencia de esta medida, denotando ello ausencia de motivación suficiente que permite relacionar estas condiciones con los hechos postulados como delito.</p>
<p>4. Exp. 00394- 2022- 1- 1704- JR- PE-01</p>	Robo	<p>Se aprecia el acta de registro de audiencia de prisión preventiva en la que se determina instalada la audiencia y producido el debate con la intervención de las partes procesales, luego de lo cual se emite la resolución correspondiente en la que se desarrollan las condiciones en las que es imputada la acción delictiva y por ende la calificación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva luego de lo cual se ha centrado en la verificación</p>

		<p>de la proporcionalidad y necesidad de la medida.</p> <p>Es en esta fase donde se aprecia un desarrollo conceptual, pero no existe mayor diseminación u orden de lo que sería el análisis de cada uno de los sub principios, pues se verifica una descripción he corrido respecto a la vinculación de estos subprincipios con lo establecido respecto a los presupuestos materiales ya analizados previamente, con lo cual se tiene una corroboración simple de tales resultados mas no una motivación que vincule estos sub principios con el hecho delictivo.</p>
<p>5. Exp. 796- 2022- 55- 1704- JR- PE-01</p>	<p>Robo agravado</p>	<p>En el acta destinada al registro de audiencia de prisión preventiva se aprecia la instalación de la audiencia y el inicio del debate respecto al requerimiento del Fiscal sobre prisión preventiva así como la intervención de la defensa pública, luego de lo que se emite resolución en la que se incorpora la descripción de los hechos y la imputación realizada por el Fiscal, luego</p>

		<p>de lo cual el juez analiza cada uno de los presupuestos, haciendo referencia a los hechos.</p> <p>Seguidamente se aprecia la revisión de la proporcionalidad y necesidad de la medida, describiendo para ello de manera conceptual los sub principios que involucra este supuesto examen que no desarrolla de manera puntual sobre los hechos, notándose una falta de concordancia entre la posición de análisis sugerida por el Tribunal Constitucional y lo que realmente se desarrolla en este análisis.</p>
--	--	--

Fuente: información proporcionada por el Poder Judicial a través del sistema de información institucional, documentos analizados que se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1dI71a5MD4twuPGWmm_Usc1_qqLhQhMRW?usp=sharing

OBSERVACION:

El resultado del análisis que se ha realizado sobre la muestra debe observarse en función a la meta principal de la investigación la cual ha sido:

Determinar el efecto que produce la insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable sobre el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022. Por lo mismo es que se verifica un resultado relacionado con los efectos que se estarían produciendo sobre la correcta secuencia del proceso destinado a reconocer la verdad respecto a un supuesto hecho ilícito.

De acuerdo a lo indicado, se muestra como resultado una condición común respecto a todos los expedientes que han constituido la muestra, es así que el primer criterio de análisis se destina a la ejecución procesal según el parámetro normativo, lo que consolida la postulación fiscal, la participación de la defensa y el análisis jurisdiccional sobre los hechos descritos y la existencia de presupuestos para el establecimiento de la prisión preventiva, lo cual se condice con el debido proceso.

Otro de los criterios que han servido para la observación ha sido la forma en que se configura el principio de proporcionalidad destinado al análisis constitucional que corresponde a la aplicación de la prisión preventiva, el carácter común que se aprecia de los expedientes aquí revisados, es el hecho de que existe la secuencia que caracteriza este aspecto de evaluación de la realidad, esto es que se plasma en tanto concepto cada uno de los subprincipios, lamentablemente no se aprecia el desarrollo que subsuma la realidad fáctica y procesal del sujeto a cada uno de los niveles de

evaluación como son la necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha.

El resultado común que representa este análisis se traslada hacia la ausencia de motivación sobre el examen que se supone ha sido incorporado al procedimiento específico para evaluar la posibilidad de prisión preventiva, aspecto que se describe como falla procesal que afecta el debido proceso, puesto que el sentido o finalidad por la que se ha incorporado es precisamente dotar de garantismo al análisis.

Capítulo V

Contrastación de la hipótesis

El diseño que se adoptó para alcanzar la contrastación de la hipótesis ha sido el que corresponde a una investigación de tipo no experimental en tanto que no se modifican los fenómenos de la realidad, en este caso las condiciones jurídicas en las que se presenta la prisión preventiva en función a los parámetros de proporcionalidad en cuanto a su determinación, así como la razonabilidad de los plazos que se establecen.

Como se ha indicado la ausencia de experimentos sobre las variables es lo que condujo a la observación de la realidad tanto desde la perspectiva teórico-doctrinaria en el campo de lo jurídico, así como de la verificación de la realidad con el fin de identificar los factores que están provocando el problema advertido en esta investigación. De acuerdo con ello la contrastación se diseñó partiendo de la determinación de las variables las mismas que orientaron la construcción de la meta principal de la tesis, así como las específicas, siendo estas últimas las que han permitido al investigador acumular y seleccionar el contenido adecuado para entender el sentido teórico en primer lugar.

Luego de la percepción teórica se ha procedido a la observación de la realidad jurisdiccional sobre la determinación de la prisión preventiva, ello con el fin de reconocer la participación del principio de proporcionalidad en función a la motivación que se supone estaría respaldando la decisión.

Toda esta información se ha procedido a discutir de forma ordenada según las metas u objetivos específicos para de acuerdo a cada uno establecer la postura que asume el investigador, esta secuencia de análisis es la que conduce al establecimiento de las determinaciones que se consolidan finalmente en las conclusiones y recomendaciones de la tesis, tal posición argumenta la determinación final de la tesis, la misma que se contrasta con la hipótesis inicial que se proyecta como resultado de la misma luego de la revisión científica jurídica.

5.1. Discusión De Los Resultados

5.1.1. Discusión del objetivo específico: “Estudiar los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales”

La actividad jurisdiccional implica un resultado que tiene efectos sobre la situación de las personas que son parte de un proceso controversial, como tal la principal característica de este efecto será la alteración de condiciones jurídicas, es en base a ello que se ha considerado lo más adecuado para el control de esta actividad, exigir la construcción de sus determinaciones

con bases jurídicas válidas que vinculen la exigencia jurídica y la realidad que se observa.

Esta vinculación será de validez en tanto los fundamentos que se utilizan se encuentren en el marco del garantismo, ello en el ámbito penal que ahora se analiza, representa la protección de las partes respecto de sus derechos fundamentales con el fin de evitar la discriminación ante la ley y que se cumpla con la finalidad del proceso penal que es la búsqueda de la verdad sobre el hecho presuntamente ilícito que se estudia.

Como primer elemento de análisis se ha considerado a los trabajos previos que sirvieron de base para reconocer el nivel de conocimiento que se ha desarrollado en torno al tema de la prisión preventiva, la proporcionalidad de su aplicación y el plazo razonable establecido. Siendo así se toma en cuenta al primer investigador Lizárraga (2018) ¿Qué tan adecuado sería señalar como un fracaso la ampliación del plazo de prisión preventiva incorporada del CPP?

La condición jurisdiccional en la que se aplica la prisión preventiva no ha sido la más adecuada, esto en tanto que la crítica jurídica se orienta a un exceso en la generación de este tipo restricción que obedecen a una medida cautelar. Pese a dichos comentarios, la intención de este tipo de mecanismo es dotar de un espacio prudente para que el titular de la acción penal pueda

desarrollar con eficiencia los actos de investigación en el marco de la proporcionalidad.

En principio la incorporación de esta medida restrictiva tiene por finalidad alcanzar una optimización de la investigación penal, lo cual se orienta en una medida que es el tiempo para tal desarrollo; es así como, ante la circunstancia particular de insuficiente espacio temporal para la ejecución de diligencias por parte del Ministerio Público, se presenta la necesidad procesal de ampliar el plazo otorgado para desarrollar tal investigación.

La regla que ha planteado este tipo de ampliación para el plazo de prisión preventiva no puede señalarse como un fracaso, en tanto que la aplicación de la misma debería darse en función a los criterios de los magistrados que serán los que evalúan dicha posibilidad en función al cumplimiento de los requisitos exigidos por la propia ley procesal.

¿El principio de proporcionalidad resulta aplicable en los casos de adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva?

Parte del desarrollo de un proceso penal bajo la característica del garantismo se observa y debe aplicarse como un control de esta particularidad; es decir que, las condiciones en las que se ejecuta el proceso obedecen a pautas exigidas legislativamente; por lo mismo que este control

ha sido diseñado para que sea ejecutado por la parte jurisdiccional que interviene en la investigación penal.

De este modo es que el control permite establecer de manera clara todos los planteamientos a ser aceptados en el proceso, para el caso de la investigación analizada se trata de un problema respecto a la proporcionalidad que debe inspirar la ampliación del plazo de prisión preventiva, lo cual debe ser materia de control y que el resultado positivo del mismo debe basarse en una motivación adecuada y en función a la proporcionalidad que enlaza la aplicación de las medidas con el debido proceso.

En base a lo señalado, la proporcionalidad juega un papel preponderante que, al ser visto desde la perspectiva del control de motivación, conlleva a la idea de que las necesidades procesales deben estar alineadas sobre el peso que ofrece la garantía de los derechos de las partes que intervienen el proceso. En tal medida, lo que se postula al proceso no solo deberá tener una adecuada motivación, sino también debe superar la garantía de los derechos antes mencionados, lo cual servirá de base para la formación del criterio jurisdiccional que a su vez tiene la obligación de motivarlo en razón de condiciones proporcionales.

¿Qué características de una determinación jurisdiccional sobre prisión preventiva denotan una aplicación correcta del test de proporcionalidad?

Habida cuenta que el sentido de control antes descrito participa sobre todo en el ámbito jurisdiccional, se debe observar en este nivel un cierto tipo de características en sus determinaciones, lo cual invitaría a reconocer la presencia de motivación de tales decisiones. Esto quiere decir que la revisión de los criterios adoptados por el juzgador debe estar plasmados de manera concreta de conformidad con los criterios planteados en la jurisprudencia vinculante, esto es la casación 626-2013 Moquegua y en los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional.

Si se trata de establecer un parámetro de calificación respecto a las determinaciones judiciales en función al nivel de proporcionalidad motivada, no se puede señalar de manera puntual cuáles serían las características que doten de eficiencia en el desarrollo jurisdiccional. Esto se debe a que las condiciones particulares de cada caso en concreto no permitirían delimitar características para el reconocimiento de un criterio proporcional en el planteamiento de la prisión preventiva o la ampliación de su plazo.

Pese a ello, se puede indicar que existen pautas previas que, si caracterizan la motivación de la resolución jurisdiccional, lo cual invita al razonamiento sobre el contenido de toda la propuesta y abre la posibilidad para que el juzgador pueda evaluar, según su criterio tanto interpretativo, así como en función a las máximas de su experiencia, fundamentar el desarrollo

del test de proporcionalidad sobre la base que ha sustentado el Ministerio Público y los fundamentos de la defensa.

Respecto a la tesis de Muñoz (2021) de acuerdo al planteamiento de adición constitucional que sugiere, es necesario cuestionar ¿Solamente se lograría una adecuada motivación de los autos de prisión preventiva si se modifica el texto del artículo 139 de la Constitución Política del Perú incorporando la frase “*la motivación en la prisión preventiva debe calificar como sospecha fuerte, para ser eficaz y evitar la desnaturalización y el perjuicio del derecho fundamental de la libertad personal*”?

Teniendo en cuenta que la propuesta planteada de la tesis en cuestión sugiere una adición de corte constitucional, es necesario dejar en claro el carácter básico de este tipo de normativa, que no por ello resulta simple, sino más bien abstracto; esto quiere decir que las reglas constitucionales asumen una posición general sobre el control del ejercicio que se desarrolla en función al poder, para el caso estudiado respecto a la prisión preventiva, interesa el sentido de control que operan los representantes del Estado al aplicar el ius puniendi como la última ratio de la intervención y que como tal existen parámetros generales que se ocupan de las garantías constitucionales como son los principios.

Es importante considerar que siendo el más alto nivel de control que se ejerce sobre el poder estatal, el sentido general que adopta, permite su adaptación a la mayoría de circunstancias posibles que se presentan en la realidad; por lo mismo, el hecho de adicionar condiciones específicas o hasta particulares conllevaría a la necesidad de realizar este tipo de ajustes para todo tipo de casos particulares en los que requiera una especificación puntual para una mejor aplicación del Derecho.

Y es que precisamente lo último señalado como la condición de aplicar el derecho bajo el carácter óptimo que se espera con el fin de alcanzar justicia, tiene como elementos de control a los principios generales del derecho así como a los que en su desarrollo procesal se han ido creado con el paso de la experiencia. En tal sentido, se puede decir que las adiciones específicas sugeridas por la tesis en comentario, no se puede considerar del todo adecuada, no solo por lo antes explicado sino también por el hecho de que la sugerencia es básicamente una réplica de lo que ya existe como garantía constitucional abstracta.

Se entiende lo anterior en tanto que el carácter general que opera a nivel de la constitución es adoptado en el campo específico a través del desarrollo legislativo que esta norma abstracta inspira; esta característica se encuentra debidamente desarrollada a través de la regulación procesal que incorpora parámetros y que además de las pautas de argumentación jurídica

exigida para las resoluciones judiciales, conducen a una aplicación adecuada, o cuando menos se presume debiera realizarse de ese modo. Como tal el problema que se verifica en la realidad se orienta más hacia una cuestión subjetiva, es decir que depende del criterio del magistrado que califica la realidad en la senda de la investigación penal.

Lo que se indica esta basado en la percepción que se ha tenido de parte del Tribunal Constitucional, ello en tanto que la interpretación que realiza no alcanza más que al desarrollo de las garantías constitucionales que circundan a la prisión preventiva, lo cual se ha desarrollado de acuerdo a principios como el de la proporcionalidad. El resultado de esta intervención, no se dirige a una modificación constitucional en tanto que es obvio que las pautas de control ya existen, que incluso ante el supuesto negado de que fuera posible este tipo de modificación normativa, es fácil presumir que en la aplicación de la realidad sería ineficaz, puesto que las condiciones que adopta el criterio jurisdiccional, tendría como adición tal exigencia en los actos resolutivos solo con la intención de cumplir, pero el desarrollo crítico no sería suficiente, tal cual sucede ahora con la exigencia de realizar el control de proporcionalidad.

Además de lo criticado sobre la tesis de Muñoz (2021), resulta importante hacer el cuestionamiento vinculado con lo anterior, ¿Para qué sirve motivar las decisiones judiciales en los autos de prisión preventiva?, como es sabido la estructura del sistema de justicia incorpora elementos de

control para generar resultados idóneos de parte de la intervención del Estado; es necesario por ello reconocer su eficacia, lo cual se puede hacer a través de un mecanismo apropiado como la revisión del contenido de los documentos que contienen las principales decisiones en el proceso penal.

La condición antes señalada, constituye un mecanismo de control que opera sobre la motivación de las resoluciones emitidas en el proceso, ello bajo el marco de la argumentación jurídica que debe estar presente en todo acto resolutivo; esto tiene por finalidad verificar la preservación de las garantías constitucionales, lo que se traduce en la protección de los derechos del imputado ante la imposición de la prisión preventiva, sobre todo por el hecho de que se trata de la restricción de un derecho fundamental como lo es la libertad personal.

Siendo así, la virtud de la motivación en los documentos que ordenan la aplicación de este tipo de medida cautelar, tendrá que asumir una postura extremadamente garantista, para lo que se precisa que deban estar indicadas de manera clara y extensiva las justificaciones que respaldan la decisión de restringir el derecho a la libertad personal

Chávez & Valdivia (2018) ¿Qué derechos vulnera el Juez de Investigación Preparatoria que en su auto de prisión preventiva no se pronuncia sobre los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional?,

teniendo en cuenta que las acciones que se desarrollan en el proceso penal deben estar destinadas no solo al reconocimiento de la verdad que se produce en torno al hecho delictivo sino también que esta intervención estatal se distinga por el cuidado de las garantías que ostenta el imputado.

Es precisamente este aspecto el que se presenta como alterado en tanto que las pautas procesales creadas para el control de la actividad jurisdiccional pesan sobre la propia acción estatal que opera en base al *Ius Puniendi*, esto quiere decir que se pretende evitar el abuso del poder que pudiera estar produciendo vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales que garantiza el ordenamiento jurídico. Por tal razón es que se espera que la forma acompañe al fondo en el reconocimiento de la verdad, es así que parte de la estructura diseñada se ha modificado con la intención de alcanzar tal control.

En tal sentido la incorporación del parámetro de control por parte del Tribunal Constitucional, supone la existencia o exigencia de un análisis destinado a la verificación del carácter constitucional tanto del requerimiento en base a sus presupuestos así como de la propia medida, lo cual debe tener un resultado que abarque incluso a la determinación del plazo, puesto que la razonabilidad incorpora este tipo de control. Es así que la noción de ello debe evitar la alteración de los derechos esenciales que incorpora el garantismo como parte del debido proceso, teniendo en cuenta además la necesidad de que las resoluciones judiciales se encuentren debidamente motivadas, que exista un plazo razonable y proporcional, todo lo que permitirá alcanzar un adecuado nivel de tutela procesal efectiva.

Chávez & Valdivia (2018) ¿Cuáles son los criterios que ha desarrollado el Tribunal Constitucional para sustentar motivadamente el presupuesto del plazo razonable de la prisión preventiva?, se debe considerar como parte esencial de la pauta sugerida por el Tribunal Constitucional que la razonabilidad debe ser una característica esencial que aborde el criterio del magistrado al momento de controlar el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Esta labor de revisión debe considerar aspectos importantes como lo es el carácter de complejidad del caso, lo cual sin duda tendrá un efecto en la cantidad y necesaria calidad de los actos de investigación que se han de desarrollar, que de ser de un nivel alto terminará por aportar un elemento de justificación para la intervención estatal mediante la prisión preventiva.

Además de ello deberá considerarse en tal examen del requerimiento, las condiciones en las que se presenta el accionar del imputado, esto es la conducta mostrada, así como la justificación planteada, esto es la condición razonable que estaría usándose para sugerir la aplicación de tal medida cautelar.

Prokopiuk & Torres (2021) ¿De qué manera el carácter constitucional de la prisión preventiva desarrollado en la Casación N.º 292-2019/Lambayeque, permite un mejor desarrollo de la motivación de los autos jurisdiccionales que se pronuncian sobre un requerimiento de prisión preventiva?, como ya se ha explicado anteriormente, el sentido de control debe operar sobre todos los aspectos en los que intervenga la protección de los derechos fundamentales del imputado.

Este control se basa en un elemento de garantía de tipo constitucional que se orienta a la necesidad de contar con una adecuada motivación de las resoluciones judiciales, lo cual tiene por finalidad dejar en claro las posturas o criterio de quien evalúa la propuesta de prisión preventiva derivándose la posibilidad de una adecuada defensa, así como la verificación de una condición de certeza en la decisión que denote seguridad jurídica.

Palli (2019) ¿El examen de proporcionalidad debe realizarse a través de los presupuestos materiales de la prisión preventiva o si es mejor que se realice de manera expresa en cada caso concreto, detallando el peso o intensidad del derecho intervenido (libertad del procesado) frente a la satisfacción del objetivo perseguido (persecución penal)?, la condición proporcional de las acciones que se toman en base a la intervención estatal del Ius Puniendi sin duda requiere de un límite, es precisamente la condición proporcional la que ostenta esta función.

Si es viable el enlace entre el carácter de proporcionalidad en su examen con las condiciones en que se producen los presupuestos materiales de la prisión preventiva, que aunque se vería como un doble examen de la realidad procesal, pese a ello siempre ha de resultar necesario ese vínculo con la situación delictiva como tal, lo cual representa un examen de la realidad de manera concreta.

Respecto a la motivación como parte de la argumentación jurídica corresponde cuestionar ¿Qué tan adecuado resulta el desarrollo del criterio jurisdiccional en función a las pautas teóricas de la motivación?

A razón de las circunstancias del criterio jurídico adoptado por los magistrados, ¿Cuál sería la justificación jurídica que valide la creación de una pauta normativa para exigir el desarrollo de la motivación de las resoluciones judiciales?

La distribución del poder en base a la estructura política del Estado se ha construido con la intención de evitar la administración de esta potestad general de manera arbitraria, en tal sentido la horizontalidad del poder que otorga al Órgano Judicial la potestad de administrar justicia permite su delegación hacia los miembros de la judicatura a fin de que se ocupen de las tareas establecidas para dicho sistema.

Ante esta distribución que se presume limita la arbitrariedad, se presente la condición necesaria de control que de acuerdo a lo analizado respecto a la función jurisdiccional se daría a través de la argumentación jurídica como base de las construcciones determinantes del órgano judicial para que oriente una adecuada motivación de cada una de las decisiones que se adopten.

En base a estas indicaciones conceptuales sobre lo que significa el control, se entiende debe existir una guía reguladora para satisfacer dicha actividad, lo cual sin duda existe ya en el propio ordenamiento constitucional que en tanto regla de contenido abstracto permite el desarrollo de pautas legislativas específicas con el fin establecido. Esto se percibe como la justificación de aquellas reglas ya existentes en el ámbito adjetivo de la legislación penal, puesto que se exige el cumplimiento del deber de motivar las resoluciones judiciales.

Por lo expuesto, no se advierte como necesario el incremento de las pautas normativas o legislativas vinculadas con el control de la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, ya existentes. Por el contrario, el examen que debiera pasar la pauta normativa ya existente es si recoge adecuadamente el concepto doctrinario respecto a la motivación como tal, este resultado bien puede utilizarse con el fin de sugerir un adecuado control específico sobre tal motivación mediante la creación de directivas que a nivel administrativo generen el control que se espera sobre esta actividad.

El hecho de evaluar la pauta de control sobre la motivación orienta la visión hacia el campo administrativo, ello en tanto que la descripción teórica y la construcción normativa así como la postura de interpretación sobre ello estaría agotada; corresponde más bien establecer el desarrollo administrativo de los parámetros de exigencia, puesto que se pretende solucionar el problema

solo con el cumplimiento directo tanto teórico así como de posturas adoptadas a nivel jurisdiccional, lo cual obviamente no tendrá un resultado positivo, tal cual es de apreciar en la realidad.

Toma de postura:

Luego de haber estudiado los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales, se tiene que la estructura del ordenamiento jurídico supone un instrumento que provee de control eficaz de las acciones que se desarrollan en el ámbito social, por lo mismo que sus resultados deben estar dotados de ciertas cualidades que generen un nivel de confianza en los ciudadanos, es por ello que la certeza de las determinaciones que se toman en aplicación de las leyes que componen el derecho en tanto regla, conducen a un efecto de validez y congruencia entre lo que existe en la realidad y lo que se puede interpretar en función a ello.

Es importante considerar un efecto de validez sobre las decisiones que se toman en el ámbito jurisdiccional sobre todo en tanto se trata de una discusión sobre ciertos derechos, su protección es importante puesto que se estará poniendo en tela de juicio la existencia de un derecho afectado y la posibilidad de afectar otro derecho a manera de compensación por el daño. Esta peculiaridad exige que la decisión se base en argumentos lo suficientemente válidos que permitan establecer un margen de coherencia entre la

intervención del Estado y la eficacia de la protección que se espera del sistema penal.

En tal sentido es posible indicar que los fundamentos que justifican la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales se vinculan con el control jurídico que debe ofrecer el sistema de justicia, la certeza de las decisiones, la predictibilidad, el debido proceso y la garantía del derecho a la defensa que no se puede ejercer si no se tiene conocimiento exacto de los planteamientos que se presentan en la discusión del proceso penal.

5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Describir los parámetros jurídicos para determinar la proporcionalidad y el plazo razonable en la aplicación de la prisión preventiva”

¿Cuál sería el parámetro correcto para motivar la proporcionalidad y el plazo razonable en el auto de prisión preventiva?

Circular del consejo ejecutivo del poder judicial que propicie la mecánica del desarrollo de análisis de la proporcionalidad como principio en audiencias de prisión preventiva

Recoger los pronunciamientos del TC vinculantes o no por falta de votos para señalar:

Principio de idoneidad el juez de investigación preparatoria debe analizar la idoneidad de medida sobre base de elementos de convicción que generen sospecha fuerte en caso concreto.

El sub principio de necesidad se recoja un desarrollo suficiente que albergue la explicación de todas las medidas de coerción personal descartándolas y justificando su inaplicación en el caso concreto cuando se prefiera la prisión preventiva frente al resto y solventar una argumentación suficiente precisando la necesidad frente a los actos de investigación que desea realizar el representante del MP ante el caso específico.

El sub principio de proporcionalidad en sentido estricto el análisis de la ponderación del derecho que se pretende restringir debe girar en torno a las condiciones específicas del caso en concreto, ponderar la intensidad de la intervención del ius puniendi y el peso de toda razón que justifica la restricción de libertad para asegurar la presencia del imputado

¿cuál es el nivel de eficacia respecto a la aplicación de los parámetros jurídicos existentes para alcanzar la proporcionalidad y el plazo razonable en la prisión preventiva?

Debe dejarse en claro que teóricamente los parámetros existentes para la correcta aplicación de la medida coercitiva mas alta en el proceso penal, son suficientes y eficaces en dicho ámbito, puesto que la proporcionalidad como secuencia de análisis justificante de su aplicación así como la razonabilidad del plazo, se convierten en una guía adecuada para el razonamiento del juzgador que califica. Luego desde la perspectiva de

aplicación de estos parámetros, conviene señalar que el sentido de eficacia únicamente puede percibirse si es que se cumple con la exigencia de motivación que resguarda la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales.

Vale decir que desde el punto de vista teórico resulta un nivel alto de eficacia respecto a los parámetros antes explicados, entre tanto que desde la percepción aplicativa de estos parámetros se advierte mas bien un bajo nivel de eficacia, siendo que esto último se vincula con la ausencia de motivación del acto que resuelve aplicar la medida cautelar.

Básicamente esta última apreciación se desprende del carácter objetivo que adopta la traslación de la regla hacia la realidad en la investigación cuando se trata de condiciones específicas respecto a la justificación del plazo a determinar para la duración de la prisión preventiva, esto se traduce como una consecuencia del inciso cuarto del artículo 271 del ordenamiento procesal punitivo peruano.

Como tal, lo señalado conlleva a que la ausencia de condiciones específicas que denoten la aplicación de un plazo máximo para la ejecución de prisión preventiva, conlleva al razonamiento automático de que tendría que aplicarse por consecuencia el plazo más bajo para esta medida; sin duda el razonamiento lógico invita a la aceptación objetiva de su encuadre jurídico; pero, desde el punto de vista analítico en función a la seguridad jurídica y

predictibilidad de los fallos judiciales, se verifica la ausencia de motivación necesaria ante la gravedad de las consecuencias que implica la aplicación de esta medida.

TOMA DE POSTURA:

Los parámetros jurídicos para determinar un desarrollo adecuado del principio de proporcionalidad al momento de evaluar la imposición de la prisión preventiva deben girar en torno a establecer el desarrollo de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad, como resultado de la justificación razonada de por qué la medida cumpliría el fin en el caso concreto, para lo cual se requiere observar la calidad de los elementos de convicción en el caso; la necesidad como el resultado de analizar todas las medidas de coerción personal y justificar las razones de por qué la prisión preventiva tendría un orden de prelación en cuanto a las otras, ello en atención a la necesidad de contar con la presencia del imputado en el proceso y en las diligencias que el Ministerio Público postula , y en el cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, se requiere justificar las razones de la ponderación entre los derechos en conflicto.

En cuanto al plazo razonable al momento de evaluar la imposición de la prisión preventiva, se debe considerar que la justificación a la duración debe girar en torno al análisis de la cualidad y cantidad de diligencias que haya solicitado el representante del Ministerio Público en su requerimiento escrito y sustentadas en su oralización. Pues, resulta que la duración del plazo

debe obedecer a la necesidad irrestricta de la exigencia de contar con la presencia física del imputado para el desarrollo de tales diligencias.

5.1.3. Discusión del objetivo específico: “Analizar los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable”

¿Cuál es la característica predominante respecto a la motivación en los autos de prisión preventiva analizados en el juzgado de investigación preparatoria de San Ignacio?

Atendiendo a la conceptualización de las resoluciones judiciales adoptada en función a la argumentación jurídica, se presenta como principal requisito a la motivación de las decisiones que se plasman en cada uno de estos documentos, ello en tanto que la función decisoria tendrá un efecto jurídico sobre la realidad de los sujetos que intervienen en el proceso de investigación. De acuerdo a ello, el resultado de esta exigencia deberá ser una determinación jurídica lo suficientemente válida para cumplir el requisito de seguridad jurídica vinculada con el carácter garantista que se presume caracteriza al proceso penal.

Las condiciones en las que se produce esta exigencia devienen de un razonamiento netamente teórico, lo cual abre la posibilidad a ciertas

excepciones en el desarrollo jurisdiccional, pero que para el caso estudiado no alcanza en tanto lo ya señalado respecto a la afectación de derechos que produce.

En base a estas indicaciones se ha podido advertir en la realidad jurisdiccional escogida, que existe una característica común entre los documentos que contienen la decisión de adoptar la medida cautelar más lesiva del sistema de justicia penal, la misma que se traduce en virtud del aspecto teórico que antes se ha explicado. Es posible que la ausencia de especificaciones taxativas para que se ejecute la exigencia de motivación sea la razón principal por el cual no se materializa una justificación que encadene la realidad con el parámetro teórico.

Esto último es importante en tanto que la necesidad de aplicar una medida debe solventar el requisito de garantismo, en tanto que la vulneración de derechos se advierte ante su restricción sin una justificación jurídica válida; bajo tal indicación, lo que se advierte de las resoluciones analizadas en su totalidad, representaría una alteración del orden constitucional que orienta al debido proceso en tanto protección de los derechos humanos que corresponden a las partes intervinientes en la investigación penal.

Con el fin de comprender lo indicado, es necesario señalar que el debido proceso en tanto conjunto de garantías que se plasman en el ámbito constitucional, conlleva a la verificación de otros principios como es el caso

de la legalidad con el fin de limitar el comportamiento, ello en tanto que el manejo del criterio jurisdiccional lo desarrolla una persona que como representante del Estado en tanto Juez puede caer en subjetividad o en el manejo inadecuado del poder que se le otorga judicialmente.

Esto último está justificado precisamente en el rango del control del poder que se ha organizado horizontalmente para trasladarse a través de los órganos de poder que es de carácter horizontal, entre tanto que dentro de cada uno de ellos se advierte la presencia de una distribución vertical del mismo, es por ello que como tarea de este control se origina la necesidad de exigir la motivación de todas las determinaciones realizadas por los magistrados, ello en atención a las exigencias del debido proceso antes indicadas (Rivera & Correa, 2021).

De acuerdo a las características de los autos de prisión preventiva analizados cabe cuestionar ¿Qué tan adecuada es la descripción del principio de proporcionalidad?

Teniendo en cuenta que los principios cumplen una función de control respecto a la manera en que se ha de aplicar el derecho, por lo mismo que no deben entenderse como reglas taxativas para su aplicación directa. En tal sentido la proporcionalidad en tanto principio surte sus efectos ante la existencia de una controversia jurídica o caso difícil de resolver con la aplicación objetiva de las leyes.

El entorno jurídico que circunda a la prisión preventiva como la medida cautelar más grave aplicada en el proceso penal, es de difícil comprensión respecto a las pautas que justifican su aplicación, ello en tanto que la restricción del derecho de libertad se produce fuera del marco del principio de presunción de inocencia que marca la permisibilidad de tal restricción solo hasta que exista una sentencia judicial firme.

Siendo así, está debidamente fundamentada la exigencia para aplicar el principio de proporcionalidad ante el requerimiento de la prisión preventiva, en base a lo cual se precisa que su participación en el desarrollo del razonamiento que impulsa aplicar la medida cautelar sea lo más idóneo posible. Esta condición no se aprecia de manera clara en el desarrollo de la función jurisdiccional analizada, puesto que únicamente se traslada una concepción teórica de lo que se entiende por proporcionalidad en tanto principio y su desarrollo; lo cual denota la ausencia de subsunción de estas condiciones de control hacia los hechos fácticos que respalden la superación de la garantía del derecho fundamental de libertad personal.

En el escenario descrito también se logró apreciar una característica común que no completa la característica de idoneidad del juzgador, en tanto que se presume de éste una preparación académica y jurídica suficiente para establecer razonamientos propios en base a la teoría. Esta indicación se da

debido a que la descripción de la proporcionalidad pese a ser netamente teórica no tiene un respaldo con fuentes válidas, lo cual haría presumir que se trata de una creación propia del magistrado, lo cual tampoco podría ser comprendido como tal, puesto que se trataría de una plantilla común utilizada por distintos jueces.

También se ha podido observar que, en el desarrollo de la necesidad respecto a la aplicación de esta medida, no se plasma una justificación jurídica válida, dado que únicamente se menciona que no existen otras posibilidades de medidas aplicables con características menos graves en la lesión del derecho a la libertad personal. Para tal fin debería adoptarse una justificación específica para cada una de las posibilidades existentes en el ámbito procesal penal, con lo cual podría cumplirse con el requisito de la necesidad justificada, obteniendo así un resultado coincidente con el control que se debe en razón al principio de excepcionalidad.

Toma de postura

En función al resultado que se ha obtenido luego de analizar los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable, se puede indicar que atendiendo a la determinación que se ha logrado respecto al enfoque teórico de la exigencia de que las decisiones judiciales se encuentren debidamente

motivadas, es preciso establecer un control en el desarrollo del proceso penal bajo este parámetro.

En virtud de lo señalado, el resultado de la observación de los casos desarrollados en los juzgados de investigación preparatoria de San Ignacio, permite ver que existe una muy notoria ausencia de motivación respecto a la decisión que se toma, esto se aprecia de manera clara en tanto que lo que se ejecuta como pauta sugerida por el Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad no se motiva correctamente. Esta ausencia de motivación plantea un índice de ineficacia del control que debería ejercerse sobre el proceso penal, dado que denota una condición de falta de certeza en la verificación de la realidad.

Por lo mismo se puede establecer que la realidad jurisdiccional no presenta una motivación adecuada respecto a la proporcionalidad en lo que respecta a la necesidad de establecer de manera puntual como se supera el examen de cada subprincipio que la compone, por lo mismo que esta determinación resulta carente de sustento válido, dado que no refleja el examen constitucional coherente con los hechos en sí, estos hechos deberían estar explicados de manera puntual en el desarrollo del examen de proporcionalidad para controlar la eficacia en el establecimiento de los presupuestos materiales y así evitar la restricción innecesaria del derecho a la libertad.

5.2. Validación de las variables

Atendiendo a la secuencia de la contrastación de la hipótesis que se ha diseñado para alcanzar finalmente la determinación de la investigación, se tiene que el concepto de las variables será desarrollado en función a las posturas que se han obtenido para cada uno de los objetivos específicos, este orden es lo que permite asumir la veracidad del concepto que incorpora cada elemento componente del problema, siendo así, el resultado es una afirmación determinante sobre el objeto de la investigación y por lo tanto será contrastada con la hipótesis inicial a fin de verificar su corroboración.

5.2.1. Sobre la variable independiente: “La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable”

Se debe considerar como punto de partida la función de esta variable independiente, la misma que como concepto se enfoca en definir el origen de la situación problemática, en tal virtud los aspectos de la motivación se califican desde el principio como insuficientes respecto a la condición de proporcionalidad y lo cual sin duda tiene efecto sobre la condición de razonabilidad que debe caracterizar al plazo que se establezca para la ejecución de esta medida cautelar.

Para el fin que se ha establecido en función a esta variable debe considerarse la existencia del carácter motivacional de las resoluciones judiciales, lo cual resulta ser una exigencia, ello en tanto que la estructura del ordenamiento

jurídico supone un instrumento que provee de control eficaz de las acciones que se desarrollan en el ámbito social, todo esto con el fin de otorgar confianza en el sistema de justicia frente a la percepción del ciudadano.

Como tal la certeza que se debe obtener de la intervención del Estado, que en este caso estudiado es a través del Ius Puniendi, debería ser tal que su nivel genera confiabilidad en las determinaciones que se toman en aplicación de las leyes, esto también debería incluir a los criterios adoptados por consenso jurisdiccional, que unido a las pautas que componen el derecho en tanto regla, conducen a un efecto de validez y congruencia entre lo que existe en la realidad y lo que se puede interpretar en función a ello.

La exigencia de los parámetros de motivación forman parte del precepto de argumentación jurídica puesto que da fuerza al carácter determinante que se incorpora como decisión en la resolución judicial, por lo que juega un papel importante la percepción de validez sobre las decisiones que se toman en el ámbito jurisdiccional sobre todo en tanto se trata de una discusión sobre ciertos derechos.

Lo explicado se encuentra en torno a la garantía que supone el proceso penal, la misma que se ha configurado así con el fin de asegurar la protección de los sujetos respecto a sus derechos humanos y fundamentales, este nivel de intervención se debe a que resulta alto el riesgo respecto a la existencia de un

derecho afectado y la posibilidad de afectar otro derecho, todo esto además forma parte de la estructura jurídica que en caso de producirse una vulneración inminente pueda encontrarse justificación para alcanzar la compensación por el daño.

En tal sentido es posible indicar que los fundamentos que justifican la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales se vinculan con el control jurídico que debe ofrecer el sistema de justicia, la certeza de las decisiones, la predictibilidad, el debido proceso y la garantía del derecho a la defensa que no se puede ejercer si no se tiene conocimiento exacto de los planteamientos que se presentan en la discusión del proceso penal.

Debe indicarse que existen pautas establecidas sobre el principio de proporcionalidad al momento de evaluar la imposición de la prisión preventiva deben girar en torno a establecer el desarrollo de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad, como resultado de la justificación razonada de por qué la medida cumpliría el fin en el caso concreto, para lo cual se requiere observar la calidad de los elementos de convicción en el caso; la necesidad como el resultado de analizar todas las medidas de coerción personal y justificar las razones de por qué la prisión preventiva tendría un orden de prelación en cuanto a las otras, ello en atención a la necesidad de contar con la presencia del imputado en el proceso y en las diligencias que el Ministerio Público postula , y en el cuanto

a la proporcionalidad en sentido estricto, se requiere justificar las razones de la ponderación entre los derechos en conflicto.

Se advierte una condición vinculante entre la determinación de los presupuestos de la prisión y la proporcionalidad y lo que ha de ser la determinación del plazo, es importante la verificación del carácter de razonabilidad que se aplica para ello, por lo cual depende de la evaluación previa que genera la prisión preventiva. Por ello es que se debe considerar que la justificación a la duración debe girar en torno al análisis de la cualidad y cantidad de diligencias que haya solicitado el representante del Ministerio Público en su requerimiento escrito y sustentadas en su oralización. Pues, resulta que la duración del plazo debe obedecer a la necesidad irrestricta de la exigencia de contar con la presencia física del imputado para el desarrollo de tales diligencias. De acuerdo a todas estas indicaciones es posible establecer como válida la variable independiente bajo la siguiente indicación:

Resulta insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable por la ausencia de justificación que vincule los parámetros jurídicos con la realidad fáctica particular de cada caso.

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “Debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022”

Comprender esta validación depende del sentido que adopta la variable, ello quiere decir que la percepción del concepto que define la consecuencia verificada en el problema de investigación, conduce al reconocimiento de los efectos jurídicos que esta produciendo, ello respalda el análisis de la investigación. Tal condición se verifica en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 cuyo análisis muestra la situación jurídica en que se produce el control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable, se puede indicar que atendiendo a la determinación que se ha logrado respecto al enfoque teórico de la exigencia de que las decisiones judiciales se encuentren debidamente motivadas, es preciso establecer un control en el desarrollo del proceso penal bajo este parámetro.

En virtud de lo señalado, el resultado de la observación de los casos desarrollados en los juzgados de investigación preparatoria de San Ignacio, permite ver que existe una muy notoria ausencia de motivación respecto a la decisión que se toma, esto se aprecia de manera clara en tanto que lo que se ejecuta como pauta sugerida por el Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad no se motiva correctamente. Esta ausencia de motivación plantea un índice de ineficacia del control que debería ejercerse sobre el

proceso penal, dado que denota una condición de falta de certeza en la verificación de la realidad.

Por lo mismo se puede establecer que la realidad jurisdiccional no presenta una motivación adecuada respecto a la proporcionalidad en lo que respecta a la necesidad de establecer de manera puntual como se supera el examen de cada subprincipio que la compone, por lo mismo que esta determinación resulta carente de sustento válido, dado que no refleja el examen constitucional coherente con los hechos en sí, estos hechos deberían estar explicados de manera puntual en el desarrollo del examen de proporcionalidad para controlar la eficacia en el establecimiento de los presupuestos materiales y así evitar la restricción innecesaria del derecho a la libertad. De acuerdo a lo que se ha logrado revisar es posible validar la variable bajo la siguiente indicación:

Se afecta el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022

5.3. Contrastación de la hipótesis

Siendo esta la parte final de la secuencia que supone la contrastación de la hipótesis, se muestra el resultado de la unión de las validaciones que se han obtenido de cada variable, ejercicio que inicialmente se realizó para construir la hipótesis, por lo mismo que esta determinación final en base a las nuevas variables ya validadas, constituye el resultado de la investigación que se pone en contraste con la postura primigenia con el fin de reconocer su corroboración.

5.3.1. Determinación final

Resulta insuficiente la motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable por la ausencia de justificación que vincule los parámetros jurídicos con la realidad fáctica particular de cada caso; por lo tanto, se afecta el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

Tabla 2: Cuadro de contrastación entre la hipótesis inicial y la determinación final

Hipótesis inicial	Determinación final
La insuficiente motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable generan un efecto de vulneración de los derechos que incorpora el debido proceso, evidenciado en los autos de prisión	Resulta insuficiente la motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable por la ausencia de justificación que vincule los parámetros jurídicos con la realidad fáctica particular de cada caso; por

preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.	lo tanto, se afecta el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.
---	---

Conclusiones

Conclusión general

Se concluye de acuerdo a la observación de la tesis que resulta insuficiente la motivación de la proporcionalidad y el plazo razonable por la ausencia de justificación que vincule los parámetros jurídicos con la realidad fáctica particular de cada caso; por lo tanto, se afecta el debido proceso en los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022.

Conclusiones específicas

Primera

Se concluye en base a los fundamentos que exigen la motivación en las resoluciones judiciales, que el ordenamiento jurídico crea un sistema de justicia que debe generar confianza en los ciudadanos, a través del efecto de validez y congruencia entre lo que existe en la realidad y lo que se puede interpretar de las reglas; por tanto, las decisiones se basarán en argumentos lo suficientemente válidos. En tal sentido son fundamentos justificantes para exigir motivación de las resoluciones judiciales tanto el control jurídico, la certeza de las decisiones, la predictibilidad, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Segunda

Se llegó a concluir que los parámetros jurídicos para determinar un desarrollo adecuado del principio de proporcionalidad al imponer prisión preventiva serán marcados por, la idoneidad, como razonamiento que justifica el fin en el caso concreto, la necesidad para justificar la prevalencia de la prisión preventiva sobre las demás, y finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, para ponderar razonablemente los derechos en conflicto. Además, para establecer un plazo razonable la justificación a la duración debe girar en torno al análisis de la cualidad y cantidad de diligencias requeridas formalmente con justificación de la presencia física del imputado.

Tercera

Se llegó a concluir de acuerdo al análisis de los autos de prisión preventiva del juzgado de investigación preparatoria en San Ignacio 2022 para identificar el nivel de control respecto al debido proceso en razón de la proporcionalidad y el plazo razonable, que existe una muy notoria ausencia de motivación respecto a la decisión que se toma, específicamente sobre la proporcionalidad que no se motiva correctamente. No se aprecia un examen de cada subprincipio con un resultado constitucional coherente con los hechos en sí, para controlar la eficacia en el establecimiento de los presupuestos materiales y así evitar la restricción innecesaria del derecho a la libertad.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al Estado peruano tomar acción sobre la realidad jurisdiccional que esta presentado la aplicación de la prisión preventiva en el sistema de justicia, que más que una medida cautelar excepcional se ha convertido en un mecanismo casi de obligatoria aplicación, lo cual no siempre presenta condiciones de gravedad en las que se justifique su aplicación. Es importante por ello tomar en cuenta investigaciones como esta en la que se muestra un factor de incoherencia entre lo que debe ser plasmado en el ordenamiento jurídico y lo que realmente se está produciendo en el ámbito jurisdiccional, para con ello asumir la posibilidad de cambios que refuercen el control de la actividad jurisdiccional de manera más eficiente.

Segunda:

Se sugiere que la Presidencia del Poder Judicial en uso de sus facultades conferidas en el artículo 144 de la Constitución y del artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emita una circular que contenga una metodología de trabajo para el correcto desarrollo del principio de proporcionalidad en las audiencias de prisión preventiva, sobre la base de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, y se adopten como pautas para el desarrollo de cada sub-principio las siguientes recomendaciones:

Idoneidad: Se deberá realizar una valoración de las probabilidades fácticas que se hayan observado en los graves y fundados elementos de convicción y

en el peligro procesal existente en el caso en concreto, que en conjunto denoten un nivel de sospecha fuerte que permita verificar la relación de medio a fin, de tal manera que el objetivo de la medida sea legítimo para asegurar que el imputado no evada la acción de la justicia y tampoco interfiera ni obstaculice la investigación penal.

Necesidad: En este nivel de análisis se sugiere una modificación al artículo 271 inciso 4 del Código Procesal Penal que señala: “4. *El juez de la investigación preparatoria, si no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia restrictiva o simple según el caso*” para que diga “(...) **optará por la medida menos lesiva pero que garantice los fines del proceso penal en el caso concreto**”.

De tal manera que esta modificatoria obligue a los jueces a realizar un diagnóstico concreto de las proposiciones medio-medio, es decir, que se deberá analizar la medida de prisión preventiva frente a todas las demás medidas de coerción personal reguladas en el código procesal penal, y entre estas opciones se deberá optar por aquella que resulte menos lesiva para el derecho a la libertad personal pero que a la vez tenga el mismo grado de idoneidad que la medida enjuiciada. Si luego de este resultado se opta por la prisión preventiva, podremos continuar la técnica de aplicación escalonada del análisis.

Proporcionalidad en sentido estricto; el sentido que debe orientar el análisis será ponderar los intereses en conflicto, esto es, los intereses del individuo (para que se respeten sus derechos fundamentales, específicamente la libertad personal y la presunción de inocencia) frente a los intereses del Estado de

garantizar el éxito de la persecución penal reconocido en el artículo 158 de la Constitución, en concordancia con el bien jurídico protegido que emerge del delito materia de imputación del caso en concreto.

Tercera:

Para el análisis de la medida de prisión preventiva, se recomienda el uso de la jurisprudencia de la Corte IDH (Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua) y del Tribunal Constitucional (Exp. N.º 0731-2004-HC/TC) que desarrollan los requisitos: complejidad del asunto, el accionar procesal del interesado y el comportamiento de las autoridades administradoras de justicia. Que, para el criterio de complejidad del asunto se analice la calidad y la cantidad de diligencias que proponga el representante del Ministerio Público en su disposición de formalización de la investigación preparatoria.

Bibliografía

- Aya Otazu, A. (2020). *Razón suficiente en la motivación de las resoluciones judiciales: análisis conceptual de los criterios establecidos por el tribunal constitucional peruano (2002-2020)*. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
- Cabanellas, G. (1998). *Diccionario de Derecho Usual. Tomo III*. Buenos Aires: Omeba.
- Castillo, L. (2005). ¿Se suspenden o restringen realmente los derechos constitucionales? Especial referencia a los procesos constitucionales en los regímenes de excepción. En E. Espinoza Saldaña, *Derechos Fundamentales y derecho procesal constitucional*. Lima: Jurista Editores.
- Castillo-Córdova, L. (2004). El principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano. Especial referencia al ámbito penal. *J. Mállap (Ed.) Doxa: tendencias*, 1-24.
- Chacón Rojas, O. (2016). *Las medidas cautelares en el procedimiento penal acusatorio*. 1-180: Universidad Abierta y a Distancia de México.
- Chávez, H., & Valdivia, L. (2018). *Eficacia de los criterios del Tribunal Constitucional, en el ámbito de la motivación del plazo razonable de la prisión preventiva, en los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca*. Cajamarca: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Obtenido de

<http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/761/TESIS%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Chávez-Tafur, G., de la Jara, E., Ravelo, A., Grández, A., Del Valle, Ó., & Sánchez Liliana. (2013). *La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?* Lima: Instituto de Defensa Legal.

Chuquihuanca Romero, F. (2019). *Debida motivación del presupuesto de peligro de fuga en las resoluciones judiciales de prisión preventiva emitidas por los juzgados de investigación preparatoria de Tarapoto, 2017*. Tarapoto: Universidad César Vallejo.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2013). *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas*. CIDH.

De Asís Roig, R. (2005). *El Juez y la Motivación en el Derecho*. Madrid: Dykinson.

Fuentes Cubillos, H. (2008). El principio de proporcionalidad en derecho penal. Algunas consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena. *Revista Ius Et Praxis, Año 14, N° 2*, 15-42.

Goicochea, J. (Abril de 2019). Acerca de la proporcionalidad en la aplicación de las medidas de prisión preventiva. *Lumen, XV(1)*, 21-26. Obtenido de <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/download/1751/1824/5495>

Granados Peña, J. (2013). El principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva y su aplicación práctica en Colombia. 1-35.

Liza, L. (Julio - diciembre de 2022). Importancia de la motivación de las resoluciones. *Revista Oficial del Poder Judicial*, 14(18), 289-304.

Obtenido de

<https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/610/865>

Lizárraga, V. (2018). *Análisis de la proporcionalidad de la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva en los procesos de criminalidad organizada*. Piura: Universidad Nacional de Piura.

Obtenido de

<https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1846/DER-LIZ-BAR-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Loza Avalos, C. (2013). La prisión preventiva frente a la presunción de inocencia en el NCPP. *Estudio Loza Avalos*, 1-15.

Martínez Gortázar, P. (2021). El principio de proporcionalidad en el proceso penal: alguna reflexión al ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. *Facultad de Derecho Universidad de La Laguna*, 1-56.

Mixán Mass, F. (1987). La motivación de las resoluciones judiciales. *Debate*

Penal(2), 193-203. Obtenido de

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_34.pdf

Moscoso, G. (2020). Prisión preventiva a la luz del control de convencionalidad. El binomio de la proporcionalidad y la debida motivación de las decisiones fiscales como regal en el proceso penal peruano. *Dikaion*, XXIX(2), 469-500. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v29n2/2027-5366-dika-29-02-469.pdf>

Muñoz, D. (2021). *La escasa motivación desnaturaliza la prisión preventiva, incumpliendo el Art. 139 de la Constitución Política del Perú*. Pimentel: Universidad Señor de Sipan. Obtenido de <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/8543/Mu%C3%B1oz%20Egusquiza,%20Deborah%20Esther.pdf?sequence=1>

Palli Calla, C. F. (Enero- Marzo de 2020). El examen de proporcionalidad en las casaciones de prisión preventiva. *Revista de Investigación de la Academia de la Magistratura*, II(2), 201-216. Obtenido de <https://revistas.amag.edu.pe/index.php/amag/article/view/31/27>

Párraga Macías, V. (2019). El principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva. *Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas*, 71-84.

Pérez Sánchez, O., & Cabrejo Villegas, J. (2021). Principios de proporcionalidad y razonabilidad en la individualización fundamentación en la sentencia penal. *Revista Ciencia y Tecnología*. Vol. 17, N° 2, 63-70.

Prokopiuk, A., & Torres, A. (2021). *Aplicación del control de constitucionalidad para la prisión preventiva y sospechas fundadas y graves en la casación N° 2912-2019/Lambayeque*. Iquitos: Universidad Científica del Perú. Obtenido de <http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1877/PROKOPIUK%20REATEGUI%20ANGELA%20ELAINE%20Y%20TORRES%20PADILLA%20ANAYKA%20HELANY%20-%20TSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ramos Arévalo, W., & Upichihua Gonzáles, C. (2019). *Motivación de las resoluciones judiciales en la imposición de la prisión preventiva en el. Moyobamba: Universidad César Vallejo.*

Rivera, T., & Correa, J. (2021). La motivación de las sentencias constitucionales como garantía del derecho al debido proceso. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, política y valores*, IX, 1-20. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9nspe1/2007-7890-dilemas-9-spe1-00110.pdf>

Sarango Rodríguez, J., & Vivanco Vargas, G. (2018). La excepcionalidad de la prisión preventiva. Elementos doctrinales y su aplicabilidad en la justicia ecuatoriana. *Revista Magazine de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo*, 3 (3), 13-15.

Valentín Gonzáles, W. (2018). *Motivación de las resoluciones de prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia en los juzgados*

de investigación preparatoria de Huaraz, 2014-2017. Huaraz:
Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo.